

NUEVA REDACCIÓN PARA LA LEY DE
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE
SOCIEDADES MERCANTILES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.....	6
TÍTULO I.....	19
DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES	19
CAPÍTULO I	19
DISPOSICIONES PRELIMINARES.....	19
ARTÍCULO 1. ÁMBITO OBJETIVO	19
ARTÍCULO 2. ÁMBITO SUBJETIVO	19
ARTÍCULO 3. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES.....	19
CAPÍTULO II	20
DISPOSICIONES COMUNES.....	20
Sección 1ª. Del proyecto y de los informes de la modificación estructural	20
ARTÍCULO 4. PROYECTO DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL	20
ARTÍCULO 5. INFORME DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN	20
ARTÍCULO 6. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE	21
ARTÍCULO 7. PUBLICIDAD PREPARATORIA DEL ACUERDO.....	22
Sección 2ª. Del acuerdo de modificación estructural y de la validez de la operación	23
ARTÍCULO 8. APROBACIÓN POR LA JUNTA GENERAL	23
ARTÍCULO 9. VALIDEZ.....	23
Sección 3ª. De la protección de los socios y los acreedores	24
ARTÍCULO 10. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS	24
ARTÍCULO 11. PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES.....	24
ARTÍCULO 12. ADECUACIÓN Y EFICACIA DE LAS GARANTÍAS	25
ARTÍCULO 13. DECLARACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA.....	25
TÍTULO II.....	26
DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES INTERNAS	26
CAPÍTULO I	26
DE LA TRANSFORMACIÓN POR CAMBIO DE TIPO SOCIAL.....	26
Sección 1ª. Disposiciones generales	26
ARTÍCULO 14. CONCEPTO	26
ARTÍCULO 15. SUPUESTOS DE POSIBLE TRANSFORMACIÓN.....	26
ARTÍCULO 16. TRANSFORMACIONES ENTRE SOCIEDAD ANÓNIMA Y SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA.....	26
Sección 2ª. Del proyecto y del informe de la transformación	26
ARTÍCULO 17. PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN	26
ARTÍCULO 18. INFORME DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN	27
ARTÍCULO 19. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE	27
Sección 3ª. Del acuerdo de transformación y protección de los socios.....	27

ARTÍCULO 20. REQUISITOS DEL ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN	27
ARTÍCULO 21. PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN	27
ARTÍCULO 22. IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO	27
ARTÍCULO 23. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS	28
ARTÍCULO 24. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.....	28
ARTÍCULO 25. PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD TRANSFORMADA	28
ARTÍCULO 26. SOCIEDADES QUE TUVIERAN EMITIDAS OBLIGACIONES U OTROS VALORES	28
ARTÍCULO 27. TITULARES DE DERECHOS ESPECIALES	29
ARTÍCULO 28. MODIFICACIONES ADICIONALES A LA TRANSFORMACIÓN	29
Sección 4ª. De la formalización y de la inscripción de la transformación	29
ARTÍCULO 29. ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFORMACIÓN	29
ARTÍCULO 30. EFICACIA DE LA TRANSFORMACIÓN	29
Sección 5ª. Efectos de la transformación sobre la responsabilidad de los socios	29
ARTÍCULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS POR LAS DEUDAS SOCIALES Y PROTECCIÓN DE ACREEDORES	29
CAPÍTULO II	30
DE LA FUSIÓN	30
Sección 1.ª Disposiciones generales	30
ARTÍCULO 32. CONCEPTO	30
ARTÍCULO 33. CLASES DE FUSIÓN	30
ARTÍCULO 34. CONTINUIDAD EN LA PARTICIPACIÓN	30
ARTÍCULO 35. TIPO DE CANJE	30
ARTÍCULO 36. PROHIBICIÓN DE CANJE DE PARTICIPACIONES PROPIAS.....	30
ARTÍCULO 37. APLICACIÓN DE LEGISLACIÓN SECTORIAL.....	31
Sección 2.ª Del proyecto de fusión	31
ARTÍCULO 38. PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN	31
ARTÍCULO 39. CONTENIDO DEL PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN	31
ARTÍCULO 40. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL PROYECTO DE FUSIÓN	31
ARTÍCULO 41. INFORME DE EXPERTOS SOBRE EL PROYECTO DE FUSIÓN	32
ARTÍCULO 42. FUSIÓN POSTERIOR A UNA ADQUISICIÓN DE SOCIEDAD CON ENDEUDAMIENTO DE LA ADQUIRENTE	32
Sección 3.ª Del balance de fusión	33
ARTÍCULO 43. BALANCE DE FUSIÓN	33
ARTÍCULO 44. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE	33
ARTÍCULO 45. IMPUGNACIÓN DEL BALANCE DE FUSIÓN	33
Sección 4.ª Del acuerdo de fusión	33
ARTÍCULO 46. INFORMACIÓN SOBRE LA FUSIÓN	33
ARTÍCULO 47. ACUERDO DE FUSIÓN	34

ARTÍCULO 48. EXIGENCIAS ESPECIALES DEL ACUERDO DE FUSIÓN	34
ARTÍCULO 49. ACUERDO UNÁNIME DE FUSIÓN	35
ARTÍCULO 50. PUBLICACIÓN DEL ACUERDO	35
ARTÍCULO 51. IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS	35
ARTÍCULO 52. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS EN LA RELACIÓN DE CANJE	35
ARTÍCULO 53. PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES.....	36
Sección 5.ª De la formalización e inscripción de la fusión	36
ARTÍCULO 54. ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN	36
ARTÍCULO 55. INSCRIPCIÓN DE LA FUSIÓN	36
Sección 6.ª Efectos de la fusión sobre la responsabilidad de los socios	36
ARTÍCULO 56. RESPONSABILIDAD POR LAS DEUDAS SOCIALES ANTERIORES A LA FUSIÓN	36
Sección 7.ª De las fusiones especiales	36
ARTÍCULO 57. ABSORCIÓN DE SOCIEDAD ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADA	36
ARTÍCULO 58. ABSORCIÓN DE SOCIEDAD PARTICIPADA AL NOVENTA POR CIENTO.....	37
ARTÍCULO 59. JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE.....	37
ARTÍCULO 60. SUPUESTOS ASIMILADOS A LA ABSORCIÓN DE SOCIEDADES ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADAS.	38
ARTÍCULO 61. OPERACIÓN ASIMILADA A LA FUSIÓN	38
CAPITULO III	38
DE LA ESCISIÓN	38
Sección 1ª. Disposiciones generales	38
ARTÍCULO 62. CLASES Y REQUISITOS.....	38
ARTÍCULO 63. ESCISIÓN TOTAL	39
ARTÍCULO 64. ESCISIÓN PARCIAL	39
ARTÍCULO 65. SEGREGACIÓN	39
ARTÍCULO 66. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ÍNTEGRAMENTE PARTICIPADA MEDIANTE TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO	39
Sección 2ª. Régimen legal de la escisión	40
ARTÍCULO 67. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCISIÓN	40
ARTÍCULO 68. PROYECTO DE ESCISIÓN	40
ARTÍCULO 69. ATRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DEL ACTIVO Y DEL PASIVO	40
ARTÍCULO 70. ATRIBUCIÓN DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O CUOTAS A LOS SOCIOS.....	40
ARTÍCULO 71. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL PROYECTO DE ESCISIÓN.....	40
ARTÍCULO 72. INFORME DE EXPERTOS INDEPENDIENTES	40
ARTÍCULO 73. MODIFICACIONES PATRIMONIALES POSTERIORES AL PROYECTO DE ESCISIÓN	41
ARTÍCULO 74. PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES Y RESPONSABILIDAD POR LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	41
ARTÍCULO 75. SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS.....	41

CAPITULO IV	42
DE LA CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO	42
Sección 1ª. Disposiciones generales	42
ARTÍCULO 76. CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO	42
ARTÍCULO 77. CESIÓN GLOBAL PLURAL.....	42
Sección 2ª. Régimen legal de la cesión global	42
ARTÍCULO 78. PROYECTO DE CESIÓN GLOBAL.....	42
ARTÍCULO 79. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.....	42
ARTÍCULO 80. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE	43
ARTÍCULO 81. ACUERDO DE CESIÓN GLOBAL	43
ARTÍCULO 82. ESCRITURA E INSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN GLOBAL	43
ARTÍCULO 83. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	43
TÍTULO III	43
DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES TRANSFRONTERIZAS INTRAEUROPEAS.....	43
CAPÍTULO I	43
ÁMBITO DE APLICACIÓN	43
ARTÍCULO 84. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES INCLUIDAS	43
ARTÍCULO 85. EXCLUSIONES	44
ARTÍCULO 86. LEY APLICABLE.....	44
CAPÍTULO II	44
DISPOSICIONES GENERALES	44
Sección 1ª. Del proyecto y protección de socios, acreedores y trabajadores	44
ARTÍCULO 87. PROYECTO DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL	44
ARTÍCULO 88. INFORME DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN	45
ARTÍCULO 89. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS.....	45
ARTÍCULO 90. PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES.....	45
ARTÍCULO 91. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	45
Sección 2ª. De la impugnación, formalización e inscripción de las modificaciones estructurales.....	46
ARTÍCULO 93. IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO	46
ARTÍCULO 94. CERTIFICADO PREVIO A LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL.....	46
ARTÍCULO 95. CONTROL DE LEGALIDAD EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO O FRAUDE	48
ARTÍCULO 96. RECURSOS Y VIGENCIA DEL CERTIFICADO PREVIO	48
ARTÍCULO 97. TRANSMISIÓN DEL CERTIFICADO PREVIO	49
ARTÍCULO 98. CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN CUANDO ESPAÑA SEA EL ESTADO DE DESTINO	49
ARTÍCULO 99. REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	49
CAPÍTULO III	50
DISPOSICIONES ESPECIALES	50
Sección 1ª. De las transformaciones transfronterizas	50
ARTÍCULO 100. CONCEPTO	50

ARTÍCULO 101. LEY APLICABLE Y FORMALIDADES	51
ARTÍCULO 102. PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN	51
ARTÍCULO 103. PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES EN LAS TRANSFORMACIONES	51
ARTÍCULO 104. FECHA Y EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN	51
Sección 2ª. De las fusiones	51
ARTÍCULO 105. CONDICIONES RELATIVAS A LAS FUSIONES	52
ARTÍCULO 106. PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN	52
ARTÍCULO 107. INFORME DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN	52
ARTÍCULO 108. INFORME DE EXPERTO INDEPENDIENTE	52
ARTÍCULO 109. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS EN LA RELACIÓN DE CANJE	52
ARTÍCULO 110. PROTECCIÓN DE ACREEDORES	52
ARTÍCULO 111. FUSIONES ESPECIALES	53
ARTÍCULO 112. FECHA Y EFECTOS DE LA FUSIÓN	53
Sección 3ª. De las escisiones con creación de nuevas sociedades	53
ARTÍCULO 113. LEY APLICABLE Y FORMALIDADES	53
ARTÍCULO 114. PROYECTO DE ESCISIÓN	54
ARTÍCULO 115. INFORME DE ADMINISTRADORES Y EXPERTO INDEPENDIENTE	54
ARTÍCULO 116. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS EN LA RELACIÓN DE CANJE	54
ARTÍCULO 117. PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES EN LAS ESCISIONES	54
ARTÍCULO 118. SIMPLIFICACIÓN DE FORMALIDADES EN LA SEGREGACIÓN	54
ARTÍCULO 119. FECHA Y EFECTOS DE LA ESCISIÓN	54
Sección 4ª. De las escisiones con sociedades existentes	55
ARTÍCULO 120. ESCISIÓN CON SOCIEDADES BENEFICIARIAS YA EXISTENTES: REGLA GENERAL	55
ARTÍCULO 121. CONTROL DE LEGALIDAD CUANDO ESPAÑA SEA EL ESTADO DE DESTINO	56
Sección 5ª. De las cesiones globales de activo y pasivo	56
ARTÍCULO 122. CONCEPTO	56
ARTÍCULO 123. LEY APLICABLE	56
ARTÍCULO 124. PROYECTO DE CESIÓN GLOBAL	57
ARTÍCULO 125. INFORME DE ADMINISTRADORES Y EXPERTO INDEPENDIENTE	57
ARTÍCULO 126. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS	57
ARTÍCULO 127. PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES	57
ARTÍCULO 128. CERTIFICADO PREVIO Y CONTROL DE LEGALIDAD	57
ARTÍCULO 129. FECHA Y EFECTOS DE LA CESIÓN GLOBAL	57
TÍTULO IV	58
DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES TRANSFRONTERIZAS EXTRAEUROPEAS	58
CAPÍTULO I	58
DISPOSICIONES GENERALES	58
Sección Única. Ámbito de aplicación y disposiciones comunes.....	58

ARTÍCULO 130. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES INCLUIDAS	58
ARTÍCULO 131. RÉGIMEN GENERAL	58
ARTÍCULO 132. CERTIFICADO PREVIO A LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN O CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO	58
ARTÍCULO 133. CONTROL DE LEGALIDAD CUANDO ESPAÑA SEA EL ESTADO DE DESTINO	59
CAPÍTULO II	59
DISPOSICIONES ESPECIALES	59
Sección Única. Transformación, fusión, escisión y cesión global.....	59
ARTÍCULO 134. TRANSFORMACIÓN	59
ARTÍCULO 135. FUSIÓN	59
ARTÍCULO 136. ESCISIÓN POR SEGREGACIÓN	59
ARTÍCULO 137. CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO	59
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. RÉGIMEN TRANSITORIO	59
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. NORMAS DEROGADAS	60
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL	60
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL	60
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. TÍTULO COMPETENCIAL	61
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. INCORPORACIÓN DE DERECHO COMUNITARIO	61
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. ENTRADA EN VIGOR	61

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La libertad de establecimiento para las sociedades y empresas, que comprende la constitución y gestión de éstas en las condiciones fijadas por la legislación del correspondiente Estado miembro y también su movilidad intraeuropea, constituye uno de los principios fundamentales del derecho de la Unión recogido en los artículos 49 y 54 del TFUE y cuya garantía ha de ser promovida con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior, en el marco creciente de internacionalización de los operadores económicos.

La presente Ley tiene como objeto la adopción de las reformas legislativas necesarias para la transposición al Derecho español de la Directiva UE 2019/ 2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas intracomunitarias.

Los antecedentes en el ámbito europeo se sitúan en la Directiva UE 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre determinados aspectos del

Derecho de sociedades que vino a refundir las directivas aprobadas hasta la fecha salvo en materia contable y a la que ya se incorporó la Directiva 2005/56 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, que regulaba las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital y que ahora constituye un precedente, también actualizado para las nuevas figuras transfronterizas.

Con anterioridad, la Comisión en su Comunicación de 28 de octubre de 2015, titulada "Mejorar el mercado interior: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas", anunció que evaluaría la necesidad de actualizar las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas con el fin de facilitar a las pequeñas y medianas empresas la elección de sus estrategias empresariales preferidas y de adaptarse mejor a los cambios en las condiciones de mercado, sin debilitar la protección del empleo. Posteriormente, la Comisión en su Comunicación de 25 de octubre de 2016 titulada "Programa de trabajo de la Comisión para 2017: Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad", anunció una iniciativa para facilitar las fusiones transfronterizas.

El objeto de la Directiva UE 2019/2121 es extender la regulación transfronteriza también a las transformaciones y escisiones tanto parciales como totales, que comporten la formación de nuevas sociedades, dotándose de nueva regulación y terminología al traslado internacional de domicilio que pasa a denominarse "Transformación transfronteriza".

La Directiva UE 2019/2121, se inserta en el contexto de la aprobación de otras directivas cuyo plazo de transposición esta próximo en el tiempo y con las que guarda una estrecha conexión, lo que ha de ser tenido en cuenta en las opciones de política legislativa que se adopten en el marco de su transposición, con el fin de no interferir en los objetivos perseguidos por aquellas.

En este ámbito, cabe situar también la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo UE 2019/1023 de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, así como la Directiva UE 2019/1151 de 20 de junio de 2019 por la que se modifica la Directiva UE 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.

Los criterios seguidos en la transposición se han basado en los principios de la buena regulación, entre los que se incluye el de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de transposición con fidelidad al texto de la Directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, de manera que se evite la dispersión en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, que supone abordar la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de regular un marco normativo estable, predecible, integrado y claro. El principio de transparencia ha sido atendido en la tramitación, ya que la consulta pública previa ha sido celebrada de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, del..... Al y el trámite de información pública conforme al artículo 26.6 de la Ley del Gobierno, se ha realizado

La trasposición de la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Noviembre de 2019 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas intracomunitarias, plantea una especial dificultad por la sistemática seguida en ésta de abordar la regulación de dichas operaciones transfronterizas a través de la modificación de la Directiva 2017/1132, que regulaba entre las diversas materias societarias que codificó las fusiones y escisiones internas, salvo en el caso de la fusión transfronteriza que ya contemplaba dicha Directiva, con una regulación basada en nuevos criterios, lo que exige la introducción de modificaciones importantes.

Así, el criterio seguido en la Directiva ha sido, de un lado, en relación con las transformaciones añadir un capítulo para regular las transformaciones transfronterizas compuesto por los artículos 86 bis a 86 unvicies, esto es, veintiún artículos con la misma numeración básica. De otro lado, respecto de las fusiones, se optó por introducir modificaciones en los artículos 119 a 121, sustituir los artículos 123 y 124, modificándose los artículos 125 y 126 e introduciéndose unos nuevos artículos 126 bis a quater. Así mismo, se modifican los artículos 128, 131, 132 y 133 sustituyéndose el artículo 130 y añadiéndose el artículo 133 bis. Finalmente, respecto de las escisiones, se introdujeron 22 artículos con la misma numeración básica, los 160 bis a 160 quatervicies.

Otro problema que plantea la transposición de la Directiva UE 2017/1132 desde el punto de vista de la sistemática empleada, ha sido decidir si la nueva regulación debía ser separada para las tres operaciones, habiendo sido esta la opción adoptada en la Directiva en la que se regulan separadamente las transformaciones, fusiones y escisiones intracomunitarias, lo que ha originado que se repitan tres veces los mismos textos literalmente; o si debería optarse por el establecimiento de unas disposiciones comunes aplicables a las tres operaciones, sin perjuicio de un tratamiento separado de las particularidades de cada una de las tres operaciones.

La opción de política legislativa finalmente adoptada ha sido integrar todo el régimen de modificaciones estructurales, internas y transfronterizas, en un marco común. El punto de partida para diseñar ese nuevo marco común ha sido la propia Directiva, cuyas soluciones para las operaciones intraeuropeas se extienden en la medida de lo posible a las operaciones internas para, manteniendo la mayor simplicidad de estas últimas, evitando asimetrías y diferencias sin justificación de política legislativa, que en su caso pudieran favorecer un riesgo de búsqueda de una jurisdicción de conveniencia (*forum shopping*) en un ámbito interno y transfronterizo.

El criterio de partida en esta armonización ha sido evitar que el régimen de las modificaciones estructurales internas resulte más exigente que el de las modificaciones estructurales transfronterizas, pudiendo no obstante serlo menos, atendiendo a la ausencia en estos casos del elemento transfronterizo.

Lo destacable es que el régimen de las modificaciones internas se convierte en el régimen de partida para las transformaciones transfronterizas que acometan las sociedades españolas, al que se añaden normas y controles específicos que atienden al carácter internacional de estas modificaciones. De esta manera se evita que coexistan dos lógicas regulatorias distintas, una para las operaciones internas y otra para las transfronterizas, dentro de la misma ley. El sistema seguido puede visualizarse como consistiendo en tres capas regulatorias. La primera y más simplificada para las operaciones internas, la segunda que añade a esa primera capa los requisitos y controles exigidos por la Directiva para las operaciones transfronterizas intraeuropeas, y la tercera, que refuerza esos requisitos y controles cuando la operación es extraeuropea. La política legislativa seguida en todos los casos es la de dotar de seguridad jurídica a las modificaciones estructurales y facilitar, con las salvaguardias imprescindibles, la movilidad internacional de las sociedades.

Así, la nueva Ley pasa a estar integrada por un Título Primero, en el que se incluyen un Capítulo Primero que contiene disposiciones preliminares relativas a las limitaciones y exclusiones aplicables a las distintas operaciones de modificación estructural reguladas; un Capítulo II, que contiene, novedosamente, las disposiciones comunes aplicables a todas las modificaciones estructurales, sin distinción de que sean operaciones internas o transfronterizas, no obstante las adaptaciones en su caso oportunas a cada operación y que comprenden, la elaboración del proyecto de modificación estructural, los informes del órgano de administración y expertos independientes, la publicidad preparatoria, la aprobación de operación proyectada, la protección de socios y acreedores y la validez de la operación inscrita. Estas disposiciones comunes se completan después, en el Título Segundo, con una serie de normas específicas para

cada uno de los tipos de modificación interna regulados en la ley: transformación por cambio de tipo social, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo.

Las modificaciones estructurales transfronterizas se abordan en los Títulos Tercero, las intraeuropeas, y Cuarto, las extraeuropeas por cuya regulación se ha optado a la vista del elevado número de operaciones que se producen en la práctica en este ámbito.

La estructura de ambos Títulos es semejante. Primero se formulan disposiciones generales para todas las operaciones transfronterizas y después se añaden reglas específicas para cada tipo de modificación estructural.

II

En lo relativo a las operaciones internas, la opción de armonizar su régimen al de las modificaciones estructurales transfronterizas, se ha llevado a cabo, manteniendo en el Título II relativo a las operaciones internas el actual texto de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, bajo el criterio sistemático adoptado de transponer la Directiva no reiterando para cada operación disposiciones que son comunes a todas ellas.

Como resultado de todo ello ha sido necesario proceder al cambio de numeración del articulado y de la estructura de la actual Ley 3/2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, suprimiéndose las menciones y especialidades para las fusiones transfronterizas que, en su caso, se recogen en el Título que regula a éstas.

Así mismo, en ocasiones ha sido necesario un cambio de denominación de las tradicionales modificaciones estructurales internas incluidas en dicha Ley, pasando a denominarse, de conformidad con la Directiva, el traslado internacional de domicilio como transformación transfronteriza, que, a su vez, se diferencia de la transformación por cambio de tipo social, que no conlleva cambio de Ley nacional.

De otro lado, en un ámbito sustantivo, se ha considerado conveniente extender también al ámbito interno algunas de las opciones de política legislativa adoptadas respecto de las modificaciones estructurales transfronterizas y entre ellas la previsión contemplada en la Directiva de dos tipos de fusiones simplificadas, añadiendo al único supuesto hasta ahora previsto de que un mismo socio sea dueño de todas las acciones o participaciones de las sociedades fusionadas, el de que unos mismos socios sean dueños en la misma proporción de todas las sociedades fusionadas, dado que no se aprecia motivo alguno que justifique una regulación diferente para las fusiones internas y para las fusiones transfronterizas.

Así mismo, la simplificación de requisitos que la Directiva establece respecto de la escisión por segregación transfronteriza aconseja no sujetar a las segregaciones internas a mayores requisitos que las operaciones transfronterizas.

Con el mismo criterio, se ha estimado conveniente generalizar al ámbito interno otras opciones adoptadas en relación con las operaciones transfronterizas, en materias tales como la impugnación o la protección de acreedores, sustituyéndose en este segundo ámbito el actual sistema de oposición por un modelo de garantías, salvo en transformaciones internas por cambio de tipo y todo ello con el fin de evitar que resulte más difícil y compleja una operación de modificación estructural en un ámbito interno que transfronterizo. De otro lado, el hecho de que la Directiva obligue a establecer para las tres operaciones transfronterizas un derecho en favor de los socios disconformes con la operación que difiere sustancialmente del derecho de separación

hasta ahora regulado, ha aconsejado extender el mismo derecho a la transformación por cambio de tipo social, aunque sea una operación interna.

Finalmente, se ha optado en materia de escisión por extender también al ámbito interno el régimen contemplado respecto de las escisiones transfronterizas de responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias de la escisión frente a las deudas que hubieran quedado a cargo de la sociedad escindida o segregada, limitándose no obstante la responsabilidad de la sociedad escindida al activo neto que quede en ella. Esta era una posibilidad que se ofrecía a los estados miembros en el artículo 146.6 de la Directiva 2017/2011 (versión codificada), que no acogimos en su momento y de la que en cierto modo se parte en la Directiva UE 2019/2121 sobre movilidad transfronteriza, siendo esta la ocasión oportuna para incorporar esta previsión, por dos razones.

De un lado, porque este régimen de responsabilidad permitiría evitar la declaración de un elevado número de concursos de acreedores de las sociedades escindidas, lo que acontece frecuentemente en la práctica.

De otro lado, porque habiéndose optado en la transposición de la Directiva UE 2019/2121 sobre movilidad transfronteriza, por extender su ámbito de aplicación también a sociedades que se encuentren bajo marcos de reestructuración preventivos (planes de reestructuración /planes de continuación) siendo esta una opción acorde con la Directiva, es importante evitar que, colocado el pasivo más numeroso en la sociedad escindida, esta no pueda atender a su satisfacción, frustrándose la ejecución de dichos planes y viéndose abocada en su caso a un procedimiento judicial concursal (concurso de acreedores).

III

El ámbito de aplicación de esta Ley sobre transformaciones, fusiones, escisiones y cesiones globales de activo y pasivo transfronterizas se limita a las sociedades de capital, constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de dicho Espacio (modificaciones estructurales intraeuropeas), así como a dichas operaciones en las que intervengan sociedades de capital constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado que no forme parte del Espacio Económico Europeo, siempre que en una de estas operaciones participe una sociedad sujeta a la legislación española (modificaciones estructurales extraeuropeas).

En adecuación a las exclusiones imperativas recogidas en la Directiva, se ha excluido del ámbito de aplicación de esta Ley a las sociedades cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público, y que funcionen según el principio de reparto de riesgos, así como sociedades en liquidación que hayan comenzado a repartir sus activos entre los socios, lo que ya se regulaba en el derecho vigente, y sociedades objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución previstos en el Título IV de la Directiva 2014/59 UE.

Se contemplan en la Directiva otros posibles supuestos de exclusión potestativa para los Estados miembros que requieren una opción de política legislativa, como es el caso de las sociedades que sean objeto de procedimientos de insolvencia o marcos de reestructuración preventiva, estos últimos regulados en la Directiva UE 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132, que ha sido objeto de reciente transposición a nuestro Derecho.

La opción adoptada respecto de sociedades en procedimientos de insolvencia, ha sido no excluir del ámbito de aplicación de esta Ley en lo relativo a transformación, fusión, escisión o

cesión global de activo y pasivo, a las compañías en concurso de acreedores o, en su caso, sometidas a planes de reestructuración, o planes de continuación en el caso de microempresas, dado que dichas modificaciones pueden constituir una importante herramienta de reestructuración, excluyéndose tan solo las transformaciones transfronterizas cuando la sociedad se encuentre en liquidación concursal.

Ello no constituye ninguna novedad en nuestro Derecho, en el que ha sido tradicional la exclusión del ámbito de la Ley sobre modificaciones estructurales de los traslados internacionales de domicilio de sociedades declaradas en concurso de acreedores, concretándose ahora la exclusión solo a los supuestos de liquidación concursal y no a aquellos en los que el concurso pueda haber desembocado en convenio, que también puede tener un contenido reestructurador y en cuyo marco puede explicarse una transformación transfronteriza.

La aplicación de esta Ley a las modificaciones estructurales transfronterizas en las que participen sociedades en concurso de acreedores sometidas a planes de reestructuración o de continuación, se regula sobre la base de una norma general de remisión al régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal, tras su reforma en virtud de la transposición de la Directiva UE 2019/1023, en lo relativo a la formación de la voluntad social, los derechos de los socios y la protección de los acreedores. Ello conlleva un desplazamiento de las normas societarias en la formación de la voluntad social y la sustitución de los mecanismos individuales de protección de socios y acreedores, por los mecanismos colectivos regulados en dicha ley, cuyo fundamento se sitúa en las amplias mayorías de consenso exigidas entre acreedores, a través de la impugnación de la homologación de los planes de reestructuración.

Esta norma general de remisión se acompaña respecto de planes preconcursales, con el fin de evitar eventuales abusos en su uso en perjuicio de los acreedores afectados por el plan y que no lo aceptaron, de una aclaración de la regla del mejor interés de los acreedores en relación con eventuales impugnaciones de acreedores de la homologación del plan y que como mecanismo individual y mínimo de protección de los acreedores les garantiza el respeto de la cuota de liquidación en una eventual liquidación concursal. A tal efecto, se les garantiza en la valoración de dicha hipotética cuota de liquidación concursal la protección dispensada en un eventual concurso abierto en España, evitándose eventuales cambios de la *lex fori concursus* en perjuicio de los acreedores afectados que no aceptaron el plan, estableciéndose que el cálculo de la cuota hipotética de liquidación se hará por referencia al concurso alternativo al plan y no al eventual concurso que pudiera declararse en el futuro.

Se traslada de esta manera la lógica prevista en el Reglamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 en relación con la denominada “protección sintética” en un procedimiento secundario territorial.

IV

Conforme a las previsiones contenidas en la Directiva, el proyecto de modificación estructural se somete a los procedimientos de información, aprobación y control que se regulan en esta Ley, con la finalidad de establecer un régimen de transparencia y legalidad común a todas las operaciones transfronterizas.

Un aspecto importante de las operaciones de modificación estructural transfronteriza es el relativo a la publicidad preparatoria de los acuerdos de las Juntas generales, siendo necesario como se recoge en la Directiva que la información que las sociedades publiquen, al menos un mes antes de la celebración de la junta general, sea exhaustiva y permita a los interesados valorar las consecuencias de la operación prevista.

Respecto del modo de hacer pública la información previa necesaria, se ha acogido la opción prevista en la Directiva dentro del sistema de publicidad registral del que se parte, de que las sociedades puedan cumplir con los requisitos de publicidad informativa a través de su página web corporativa, que es el medio de publicidad contemplado prevalentemente hasta ahora por la Ley sobre modificaciones estructurales. En el supuesto de que la sociedad opte por la publicación de la información preceptiva a través de su página web corporativa, es necesario, como prescribe la Directiva, que la sociedad remita al Registro mercantil determinada información, incluyendo los detalles del sitio web en el que poder obtener en línea y de manera gratuita toda la documentación e información correspondiente.

La presentación en el Registro mercantil de la información y documentación preceptiva podrá efectuarse de manera electrónica, como prevé la Directiva para facilitar el desarrollo de estas operaciones en consonancia con la digitalización en el ámbito del Derecho de sociedades que se promueve desde la Unión Europea. La posibilidad de realizar íntegramente en línea los distintos trámites que requieren estas operaciones, sin necesidad de que los solicitantes comparezcan físicamente ante las autoridades competentes encargadas del control de legalidad, se extiende, como norma, a todas las fases del procedimiento, incluyendo la solicitud del certificado previo que corresponde otorgar al Registrador Mercantil para que estas operaciones puedan realizarse.

En lo que se refiere al contenido de la publicidad preparatoria de los acuerdos de modificación estructural transfronteriza, cumpliendo también con lo exigido por la Directiva, es necesario que se publique el proyecto de la operación, junto a “un aviso” -denominado en el texto de transposición como “anuncio” por ser un término más acorde a nuestra tradición jurídica-, mediante el que debe informarse a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores o, cuando no existan tales representantes, a los propios trabajadores, de la posibilidad de formular observaciones, hasta cinco días laborales antes de la junta general, sobre la operación propuesta. Además, haciendo uso de una opción prevista en la Directiva, en el texto de transposición se exige que el informe del experto independiente, dada su relevante función en el procedimiento y para distintos interesados, también se publique y se ponga a disposición del público, sin perjuicio de que la sociedad pueda excluir la información confidencial cuya revelación pudiera ir en detrimento de su posición comercial en el mercado.

Así mismo, en esta Ley se acoge, dentro de unos límites, la posibilidad recogida en la Directiva de reforzar el sistema de publicidad preparatoria de los acuerdos mediante la utilización del boletín nacional o una plataforma electrónica central, disponiéndose en línea con lo que ya se prevé en la Ley sobre Modificaciones Estructurales, que la presentación y depósito de la correspondiente documentación en el Registro Mercantil se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o, como se añade ahora, en la plataforma central europea.

V

En esta Ley se incorporan las disposiciones de la Directiva relativas a la aprobación de las operaciones transfronterizas por las Juntas generales de los socios, distinguiendo, dadas las diferencias en nuestro ordenamiento, entre las sociedades anónimas y las sociedades limitadas en lo que se refiere a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos.

Siguiendo lo previsto en la Directiva, se dispone que toda modificación del proyecto de transformación o de escisión transfronteriza requerirá las mismas mayorías que la adopción de los acuerdos.

Debido a las repercusiones que las modificaciones estructurales tienen para los socios de las sociedades participantes en ellas, la disposición de instrumentos de protección de sus intereses, particularmente en favor de socios disidentes de la operación, ha constituido un tema objeto de

particular atención en la transposición de la Directiva. Así, se regulan instrumentos que responden a distintas técnicas y motivos de protección, teniendo en cuenta la distinta naturaleza y efectos de cada modificación estructural, así como la especificidad de los intereses de los socios afectados. En este marco, el reconocimiento de un derecho de los socios disidentes a separarse de la sociedad, ya conocido tradicionalmente, y mantenido de forma continuada en nuestro derecho en modificaciones como la transformación, la fusión transfronteriza o el traslado del domicilio al extranjero, ha terminado constituyéndose como instrumento de referencia para la protección de los socios. La Directiva que se traspone en este texto legal sigue esta orientación y acoge una peculiar variante del derecho de separación, con aplicación común en todas las operaciones transfronterizas armonizadas.

Este instrumento común de protección es el derecho que tienen los socios que hayan votado en contra del correspondiente acuerdo de enajenar sus acciones o participaciones, y de obtener a cambio una compensación en efectivo adecuada que la sociedad debe ofrecerles en el proyecto de la operación. Debe pues entenderse, que la sociedad está en última instancia obligada a la adquisición, sin perjuicio de que pueda presentar al socio que ejerce el derecho un adquirente distinto, sea otro u otros socios, sea un tercero. En todo caso, el socio disconforme con la compensación ofrecida debe tener la posibilidad de reclamar una compensación complementaria en efectivo, que, de obtenerse, podrá beneficiar a todos los demás socios ejercientes del mismo derecho de enajenación.

Esta es la fórmula de protección común que coexiste en el marco de la fusión y la escisión, en las que el socio tiene derecho a integrarse en las sociedades resultantes. Por otra parte, los socios que no se separen disponen de una protección específica que consiste en el derecho a obtener una relación de canje adecuada, con derecho de impugnación de la que se haya establecido y de reclamación de un pago compensatorio en efectivo.

Ello explica que se excluyan como motivos de impugnación de los acuerdos sociales, la inadecuada fijación de la relación de canje, la compensación en efectivo o que la información al respecto no cumpla con algún requisito legal.

Tanto en lo que se refiere al derecho de los socios a enajenar sus acciones o participaciones, como al derecho a impugnar la relación de canje en la fusión y la escisión, ha sido necesaria en la transposición de la Directiva a nuestro derecho la adopción de decisiones de política legislativa entre las distintas opciones ofrecidas por la Directiva, priorizando en ello la realización de las operaciones de modificación estructural transfronteriza.

Igualmente se han tenido en cuenta otros aspectos de la regulación de las operaciones transfronterizas, de carácter general o especial, con una eficacia también protectora de los socios, como ocurre con los diversos instrumentos de información previstos a lo largo del procedimiento, en el propio contenido del proyecto con que se inicia, en relación al registro y la publicidad exigida, o en conexión con los informes de administradores y expertos independientes que deben emitir a lo largo de su desarrollo.

En consecuencia, siguiendo lo dispuesto por la Directiva y el criterio ya mantenido en la Ley sobre Modificaciones Estructurales respecto del derecho de separación en las operaciones transfronterizas, el derecho de los socios a enajenar sus acciones o participaciones se reconoce sólo en favor de quienes voten en contra del acuerdo de modificación estructural transfronteriza y experimenten un cambio de legislación aplicable. Se ha considerado conveniente extender el derecho a los socios que posean acciones o participaciones sin voto y también sufran un cambio de *lex societatis*.

El derecho a impugnar la relación de canje y reclamar un pago en efectivo en el caso de fusión y escisión transfronteriza, se limita a los socios que no tengan o no ejerzan el derecho a

enajenar sus acciones o participaciones, reconociéndose, por otro lado, que la sociedad resultante de la fusión transfronteriza o las sociedades beneficiarias de la escisión, y en el caso de escisión parcial también la sociedad escindida, puedan aportar acciones o participaciones en lugar de un pago en efectivo.

Otras opciones ofrecidas por la Directiva, como permitir a las sociedades entregar compensaciones de otra naturaleza a los socios sin su aquiescencia, no se han recogido en el texto de transposición, en el que, por otro lado, se ha optado por una tutela judicial, en lugar de administrativa, como mejor medio de garantizar la efectividad de sus derechos. De este modo, se reconoce la posibilidad de que el socio que desee enajenar sus acciones o participaciones pueda reclamar una compensación en efectivo complementaria ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, si considera que la compensación ofrecida por la sociedad en el proyecto de modificación estructural no se ha fijado adecuadamente. Asimismo, se establece que los Juzgados de lo Mercantil son los órganos competentes para entender de la eventual impugnación de la relación de canje en la fusión y en la escisión transfronteriza, dejando claro que dicha impugnación no puede impedir la inscripción de la operación en el Registro mercantil.

La Directiva establece nuevos criterios de competencia judicial en materia de protección de socios y acreedores. Estos criterios están llamados a completar el sistema del Reglamento (UE) número 1215/2012 del Parlamento y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I). En este sentido, se ha reflejado en el texto de este proyecto de ley si, de conformidad con la Directiva, el criterio de competencia judicial de que se trata tiene o no carácter de competencia judicial exclusiva. Por otra parte, la Directiva aclara que el carácter exclusivo de la competencia judicial no es óbice para que las partes puedan someter a arbitraje esas mismas disputas; arbitraje que, para asegurar la coherencia del sistema, cuando la competencia exclusiva corresponda a los tribunales españoles, deberá tener su sede en España.

VI

La falta de regulación de las transformaciones y escisiones transfronterizas, así como la amplitud con que se regulaba la protección de los acreedores en las fusiones transfronterizas, había dado lugar a que en los distintos derechos nacionales coexistieran regímenes tuitivos muy diferentes que dificultaban la materialización de esas operaciones.

Con el fin de subsanar tales carencias, se introducen en la Directiva 2019/2121, novedosas medidas tuitivas de los acreedores, de distinta naturaleza, imperativa o facultativa -muchas comunes a todas las operaciones y otras particulares para sólo alguna de ellas- que permitan una mínima armonización entre los distintos derechos nacionales.

Ello conlleva la necesidad de introducir un cambio de paradigma en materia de protección de acreedores en virtud de la transposición de la Directiva a nuestro Derecho, tradicionalmente situado en el reconocimiento de un derecho de oposición, con la posibilidad exorbitante de fianza solidaria de entidad de crédito como vía para enervar un eventual derecho de oposición de acreedores y su incidencia en la ejecución de la modificación estructural.

En cambio, en la transposición de la Directiva 2019/2121 se ha optado por regular como medidas de protección de acreedores comunes a las tres operaciones de modificación estructural, de un lado, la exigencia de que los administradores informen sobre las implicaciones para los acreedores de la operación propuesta y hagan constar en el proyecto “toda garantía” que, en los casos apropiados, se ofrezca a los acreedores; publicidad que, a su vez, es instrumental respecto del derecho que se les reconoce a presentar “observaciones” con antelación a la junta general, exponiendo, en su caso, su disconformidad con las garantías que la operación les ofrece.

De otro lado, cuando la satisfacción de sus derechos esté en juego debido a la modificación estructural, se reconoce el derecho a obtener garantías “adecuadas” de la sociedad a todos los acreedores que hayan mostrado su disconformidad con las garantías ofrecidas por aquella. No obstante, el ejercicio por el acreedor de ese derecho a obtener garantías adecuadas se supedita a que, antes de recurrir al amparo judicial y con el objetivo de desjudicializar en lo posible estas operaciones, acuda al Registrador Mercantil con el fin de que, a la vista del informe del experto y con la intermediación del Registrador, la sociedad y dichos acreedores puedan llegar a un acuerdo. En caso de que el informe del experto no se hubiese emitido, el Registrador nombrará a solicitud de los acreedores un experto independiente.

Se atiende así a la particularidad de nuestro ordenamiento donde el control de legalidad de las operaciones sociales está a cargo de una autoridad administrativa, el Registrador mercantil, y no judicial, como ocurre en otros países. No obstante, ello se acompaña del reconocimiento al acreedor que siga insatisfecho de un amparo judicial, de modo que este órgano sea el único que pueda manifestarse, en última instancia, sobre la cuestión sustantiva de la “adecuación” de las garantías ofrecidas al acreedor.

Con el fin de facilitar al juez -y, previamente, a la sociedad y al propio acreedor- la valoración de la adecuación de las garantías, se incorporan, en coherencia con la Directiva, dos presunciones *iuris tantum*: la valoración de adecuación que se haya realizado en su caso en el informe del experto independiente y la emisión también en su caso por los administradores de una declaración sobre la situación financiera de la sociedad, que es facultativa.

Se ha optado así en nuestro Derecho por regular como medida de protección de acreedores común a las distintas modificaciones estructurales, la posibilidad de que los administradores de la sociedad que realice o participe en la operación transfronteriza, emitan dicha declaración sobre la situación financiera de la sociedad. Con esta regulación, que supone una novedad en nuestro Derecho, se hace uso de la facultad que ofrece la Directiva a los Estados miembros y se persigue de algún modo compensar a los acreedores por la pérdida de su tradicional derecho de oposición.

En dicha declaración, que se publicará junto con el proyecto, los administradores manifestarán que con base en la información de que disponen y tras haber efectuado averiguaciones razonables, no conocen ningún motivo por el que la sociedad, después de que la operación surta efecto, no pueda responder de las obligaciones a su vencimiento, lo que operaría como presunción *iuris tantum* de “adecuación” de las garantías.

No obstante, con la finalidad de nuevo de facilitar la realización de este tipo de operaciones transfronterizas, ninguno de los planos de protección del acreedor, ni el registral ni el judicial, paralizará el procedimiento. De este modo, el certificado previo y la ejecución de la modificación estructural podrán emitirse y llevarse a cabo, aun cuando el acreedor haya ejercitado su derecho a solicitar garantías adecuadas ante alguna o ambas autoridades judicial o registral.

Por último, debe resaltarse que existen normas especiales de protección de acreedores en las distintas operaciones de modificación estructural. En este marco, en los casos de transformación transfronteriza, se mantiene en el Estado de origen un foro de competencia judicial en favor de los acreedores durante los dos años posteriores a que la operación haya surtido efecto; así mismo, en los casos de escisión, se establece un régimen común de responsabilidad solidaria de las sociedades beneficiarias de la escisión frente a las deudas que hubieran quedado a cargo de la sociedad escindida o segregada, limitándose no obstante la responsabilidad de la sociedad escindida al activo neto que quede en ella.

VII

En las modificaciones estructurales transfronterizas los trabajadores se ven protegidos tanto en sus derechos de información y consulta, como en sus derechos, cuando existan, de participación o cogestión en los órganos de dirección o control. El régimen de protección de la Directiva 2019/2121, previsto para las fusiones transfronterizas, sigue vigente en lo sustancial, aun cuando ahora se extiende también a las operaciones de transformación y escisión transfronteriza.

Con ese fin, se introducen algunas novedades en la regulación de los derechos de información y consulta, exigiéndose la previsión de una sección específica para los trabajadores en el informe del órgano de administración, reconociéndose a los trabajadores el derecho a presentar observaciones al proyecto con antelación a la junta general, en la misma línea que a socios y acreedores, incorporándose estas novedades vinculadas al procedimiento de modificación estructural a la Ley sobre modificaciones estructurales.

Todo ello se materializa en un artículo único, semejante al que existía para las fusiones transfronterizas, que ahora afecta también a las transformaciones y escisiones, por lo que se incluye en la sección de disposiciones comunes, dentro de la opción de política legislativa de evitar la repetición de los mismos preceptos.

No obstante, siguiendo la sistemática adoptada en el anterior régimen de fusiones transfronterizas, las modificaciones vinculadas a la protección de los derechos de participación o cogestión de los trabajadores se siguen regulando en la Ley 21/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, que se ve modificada por la implementación de la Directiva.

La protección de esos derechos de participación o cogestión impuesta por la Directiva exige que cuando la sociedad realice la operación transfronteriza, la sociedad o las sociedades resultantes de la operación queden obligadas a adoptar una forma jurídica que permita, tras una negociación entre la sociedad y sus trabajadores, la presencia de los representantes de los trabajadores en los órganos de dirección o control correspondientes en la o las sociedades resultantes.

Con el fin de evitar la elusión de sus derechos, la Directiva exige que no se puedan suprimir los derechos de participación mediante la realización de transformaciones, fusiones o escisiones ulteriores, ya sean nacionales o transfronterizas, en el plazo de cuatro años. Si la negociación exigida por la Directiva no tuviese éxito porque no se lograse un acuerdo, deberán aplicarse *mutatis mutandis*. las disposiciones que figuran en el anexo de la Directiva 2001/86/CE.

VIII

En la Directiva objeto de transposición el reconocimiento y potenciación de la libertad de establecimiento de las sociedades o empresas como principio fundamental de la Unión, se acompaña de la exigencia de cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por las legislaciones de los Estados a los que pertenezcan las sociedades implicadas en las modificaciones estructurales transfronterizas.

A tal fin y para dar seguridad jurídica a las operaciones que se desarrollen, se articula un sistema que garantice el reparto de las tareas de control que corresponden a los Estados, obligando a que cada uno de ellos designe una autoridad que expida el denominado “certificado previo a la operación”, instrumento con el que finaliza cada procedimiento interno en el Estado de origen y, de forma inmediata, permite acceder a la aprobación definitiva de la modificación estructural proyectada en el Estado de destino.

Este certificado constituye un control autóctono y armonizado, previo, eficaz y eficiente, que acredita la legalidad de cada operación conforme al Derecho del Estado donde opera la sociedad en proceso de modificación estructural y, una vez emitido, tendrá que ser compartido con las autoridades de los demás Estados que intervengan en la operación a través del sistema de interconexión de registros, quedando a disposición del público, de forma gratuita.

Se ha optado por designar al Registrador Mercantil como la autoridad competente para expedir el certificado previo que acredite que se han cumplido todas las condiciones exigidas y los procedimientos necesarios, dado que en el Derecho español el Registrador Mercantil ya es la autoridad nacional que viene emitiendo el certificado previo en las fusiones transfronterizas intracomunitarias y en el traslado internacional de domicilio conforme a la Ley sobre Modificaciones Estructurales 3/2009, de 3 de abril.

Así mismo, se ha considerado al Registrador Mercantil la autoridad nacional idónea, dado que dispone de toda la información relevante relativa a las sociedades al concentrar la hoja registral de cada una de ellas, no sólo la información producida internamente por la sociedad, sino también otro tipo de resoluciones emitidas por diferentes autoridades que afectan a la vida societaria, como son las resoluciones judiciales en materia de concurso de acreedores, las declaraciones judiciales de fallido por impago de salarios, o la revocación del NIF, así como la baja provisional del índice de Entidades acordadas por las autoridades tributarias, con el consiguiente cierre registral.

Se ha tenido en cuenta, además, que el Registrador Mercantil tiene ya atribuida la función de designar expertos independientes que intervengan en diversas operaciones societarias de valoración y a los auditores que verifiquen las cuentas anuales de las sociedades.

Si el Registrador Mercantil durante el control de legalidad tuviera sospechas fundadas de que la operación se realiza con fines abusivos o fraudulentos, teniendo por objeto o efecto eludir el Derecho de la Unión o el Derecho español, o servir a fines delictivos, se ha previsto, de conformidad con la Directiva que, según el motivo de la sospecha, el Registrador Mercantil pueda recabar en tiempo útil del organismo o entidad pública que corresponda por razón de la materia, la información adicional que considere necesaria.

Se ha utilizado la expresión “autoridades del ámbito tributario, económico, social o penal”, sin designar concretas autoridades, para evitar que quede desfasada la nomenclatura de la ley tras eventuales cambios de que pudiera ser objeto la denominación concreta de los organismos públicos. También se ha recogido la opción que permite la Directiva de que el Registrador pueda recabar información de la autoridad del Estado de destino y recurrir a efectos de valoración a un experto independiente. No se ha querido fijar un plazo específico en el que el Registrador Mercantil deba recabar la información de otras autoridades, sino que se ha utilizado la expresión “en tiempo útil”, para dar la mayor flexibilidad posible al procedimiento, según los casos, y dentro del plazo global para emitir el certificado.

El Registrador Mercantil llevará a cabo una valoración global de la información y documentación que haya recibido y si de ella resultara de manera clara que la operación transfronteriza se lleva a cabo con fines abusivos o fraudulentos o con intención delictiva, denegará el certificado previo.

Se ha considerado conveniente establecer un período de vigencia del certificado que se ha fijado en seis meses, prorrogable por causa justificada a juicio del Registrador Mercantil por seis meses más.

La presente Ley, al transponer la Directiva 2019/2121, garantiza la protección de los trabajadores, los socios y los acreedores; no obstante, ninguna norma de garantía de estos derechos podrá bloquear la emisión del certificado previo y la aprobación de la modificación estructural transfronteriza.

El Registrador Mercantil denegará el certificado previo, agotando la vía administrativa y abriendo la vía procesal ante el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social conforme a los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal, cuando no se cumplan las condiciones, los procedimientos y trámites previstos o se considere que la operación presentada se realiza con fines abusivos o fraudulentos, o tenga por objeto o produzca el efecto de eludir el Derecho de la Unión o el Derecho español o sirva a fines delictivos.

Siguiendo lo previsto en la Directiva, se establece como Disposición común para las todas las operaciones transfronterizas intraeuropeas, una norma que, en aras de la seguridad jurídica, establece claramente que no cabe declarar la nulidad de la operación transfronteriza que haya surtido efectos. La Directiva se refiere a la nulidad absoluta, si bien en el texto de transposición se ha optado por no acoger una terminología que no es propia de nuestros textos legales, aunque la distinción entre nulidad absoluta y relativa no sea desconocida en la doctrina jurisprudencial. Por otro lado, se ha considerado conveniente aclarar en la misma norma y cuyo precedente está en la propia Ley sobre modificaciones estructurales, que quedan a salvo, en su caso, los derechos de socios y terceros al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la operación realizada. Asimismo, siguiendo también lo dispuesto en la Directiva se ha previsto que la imposibilidad de declarar la nulidad de una modificación estructural transfronteriza eficaz tampoco obsta a la aplicación de las disposiciones penales u otras que permitan imponer medidas y sanciones después de que la operación haya surtido efectos.

IX

Las modificaciones estructurales transfronterizas con sociedades constituidas fuera del Espacio Económico Europeo se abordan en el Título IV bajo el rótulo de “modificaciones estructurales transfronterizas extraeuropeas”.

En su regulación se ha seguido el mismo esquema de las operaciones intraeuropeas, con las necesarias adaptaciones, teniéndose en cuenta que esta regulación es unilateral sin que hasta el momento una directiva o regla convencional establezca un marco común con Estados no miembros. Tampoco se benefician de algunas de las reglas facilitadoras que, sin embargo, se aplican a las operaciones intraeuropeas.

En cuanto al control de estas operaciones, se ha optado por seguir el mismo mecanismo de control en dos fases seguido para las operaciones intraeuropeas: certificado previo a la operación por el Estado de origen y control de legalidad de la realización o conclusión de la operación por el Estado de destino.

Cuando se trate de una operación en la que España sea el Estado de origen, como sería el caso en el que, en una operación de fusión, una sociedad española vaya a ser absorbida por una sociedad extraeuropea, el Registrador Mercantil español deberá emitir un certificado previo con los mismos controles y requisitos que se requieren en las operaciones intraeuropeas.

A su vez, cuando España sea el Estado de destino y, en una fusión, una sociedad española absorba a una sociedad extraeuropea, el Registrador Mercantil practicará el control de legalidad de la fusión de misma forma que lo hace en el caso de las operaciones intraeuropeas.

No obstante, en las operaciones extraeuropeas se sustituye la exigencia del certificado previo emitido por el Estado de origen por una certificación del Registrador o autoridad competente extranjera que, por si sola o en conjunción con otros documentos, acredite que la operación es legal en ese Estado y que se han cumplido todas las condiciones, así como cumplimentado todos los trámites que el Derecho de ese Estado exija para la modificación estructural transfronteriza de que se trate.

TÍTULO I DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES

CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares

Artículo 1. Ámbito objetivo

La presente Ley tiene por objeto la regulación de las modificaciones estructurales, tanto internas como transfronterizas, de las sociedades mercantiles consistentes en la transformación, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo.

Artículo 2. Ámbito subjetivo

La presente Ley es aplicable a todas las sociedades que tengan la consideración de mercantiles, bien por la naturaleza de su objeto, bien por la forma de su constitución.

Las modificaciones estructurales de las sociedades cooperativas se regirán por su específico régimen legal.

Artículo 3. Limitaciones y exclusiones

1. Las sociedades en liquidación podrán realizar una modificación estructural siempre que no haya comenzado la distribución de su patrimonio entre los socios.
2. Las sociedades que se encuentren en concurso de acreedores o sometidas a un plan de reestructuración o, en su caso, a un plan de continuación, podrán proceder a una transformación, fusión, escisión o cesión global. La formación de la voluntad social, los derechos de los socios y la protección de los acreedores se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
3. A los efectos de la aplicación de la regla del mejor interés de los acreedores de las sociedades sometidas a un plan de reestructuración, la cuota hipotética de liquidación se calculará por referencia a lo que se obtendría en un procedimiento concursal abierto en España.
4. No podrán proceder a una transformación transfronteriza sociedades que se encuentren en liquidación concursal.
5. Esta Ley no se aplica a las sociedades objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución previstos en el título IV de la Directiva 2014/59 UE.

CAPÍTULO II

Disposiciones comunes

Sección 1ª. Del proyecto y de los informes de la modificación estructural

Artículo 4. Proyecto de modificación estructural

1. Los administradores de la sociedad o sociedades que realicen o participen en una modificación estructural deberán elaborar un proyecto que contendrá, al menos, las menciones siguientes:

1º La forma jurídica, razón social y domicilio social de la sociedad o sociedades participantes y, en su caso, los mismos datos respecto de la sociedad resultante.

2º La modificación y el calendario indicativo propuestos de realización de la operación.

3º Los derechos que vayan a conferirse por la sociedad resultante a los socios que gocen de derechos especiales o a los tenedores de valores o títulos que no sean acciones, participaciones o, en su caso, cuotas, o las medidas propuestas que les afecten.

4º Las implicaciones de la operación para los acreedores y, en su caso, toda garantía personal o real que se les ofrezca.

5º Toda ventaja especial otorgada a los miembros de los órganos de administración, dirección, supervisión o control de la sociedad o sociedades que realicen o participen en la modificación estructural.

6º Los detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios que dispongan del derecho a enajenar sus acciones, participaciones o, en su caso, cuotas.

7º Las consecuencias probables de la operación para el empleo.

2. El proyecto contendrá además las menciones que para cada tipo de modificación estructural se establecen en esta Ley.

Artículo 5. Informe del órgano de administración

1. Los administradores elaborarán un informe para los socios y los trabajadores explicando y justificando los aspectos jurídicos y económicos de la modificación estructural, sus consecuencias para los trabajadores, así como, en particular, para la actividad empresarial futura de la sociedad y para sus acreedores.

2. El informe incluirá una sección destinada a los socios y otra a los trabajadores. La sociedad podrá decidir si elabora un informe que contenga esas dos secciones, o si elabora informes por separado destinados, respectivamente, a los socios y los trabajadores.

3. En la sección del informe destinada a los socios se explicarán, en particular:

1º La compensación en efectivo propuesta en el proyecto en caso de ejercicio por los socios que dispongan del derecho a enajenar sus acciones, participaciones o, en su caso, cuotas, y el método empleado para determinar tal compensación.

2º Las consecuencias de la modificación estructural para los socios.

3º El eventual impacto de género de la modificación propuesta en los órganos de administración, así como su incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

4° Los derechos y las vías de recurso a disposición de los socios de conformidad con esta Ley.

4. La sección del informe destinada a los socios no será exigible cuando así lo hayan acordado todos los socios con derecho de voto de la sociedad o sociedades participantes y, además, todas las personas que, en su caso, según la ley o los estatutos sociales, fueran titulares de ese derecho.

5. En la sección del informe destinada a los trabajadores se explicarán las posibles consecuencias de la modificación estructural sobre el empleo.

6. Como mínimo un mes antes de la fecha de celebración de la junta general que apruebe la operación, el informe o informes se pondrán a disposición de los socios y de los representantes de los trabajadores de la sociedad o, cuando no existan tales representantes, de los propios trabajadores, junto con el proyecto de modificación estructural, de estar disponible. Dicha puesta a disposición se realizará con carácter inmediato y gratuito en la página web de la sociedad de existir esta y, en su defecto, mediante su remisión por vía electrónica cuando así se solicite. En las operaciones transfronterizas dicho plazo será de seis semanas.

7. Cuando el órgano de administración reciba, en tiempo oportuno, una opinión sobre la información a que se refieren los apartados 1 y 5 de los representantes de los trabajadores o, cuando no existan tales representantes, de los propios trabajadores, se informará a los socios de dicha opinión, que se adjuntará al informe.

8. No se requerirá la sección del informe destinada a los trabajadores cuando la sociedad y sus filiales, de haberlas, no tengan más trabajadores que los que formen parte del órgano de administración o de dirección.

9. No se requerirá el informe cuando se renuncie, de conformidad con el apartado 4, a la sección del informe destinada a los socios a que se refiere el apartado 3 y no se exija, con arreglo al apartado 8, la sección destinada a los trabajadores a que se refiere el apartado 5.

Artículo 6. Informe de experto independiente

1. Un experto independiente designado por el Registrador Mercantil, a solicitud de los administradores, examinará el proyecto de modificación estructural y elaborará un informe destinado a los socios en los términos previstos para cada tipo de operación. Ese informe se pondrá a su disposición al menos un mes antes de la fecha de la junta general que apruebe la modificación estructural.

2. Cuando los socios dispongan, como consecuencia de la modificación estructural, de un derecho a enajenar sus acciones, participaciones o cuotas a la sociedad a la que pertenezcan o a los socios o terceros que esta proponga a cambio de una compensación en efectivo, el informe incluirá una opinión sobre si dicha compensación es adecuada.

3. Al valorar la compensación en efectivo, el experto tendrá en cuenta todo precio de mercado de las acciones o participaciones en la sociedad antes del anuncio del proyecto o el valor de la sociedad sin considerar el efecto de la operación propuesta, tal como se determine conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados. En el informe figurará, al menos:

1° Una indicación del método o los métodos empleados para determinar la compensación en efectivo propuesta;

2° Una indicación de si el método o los métodos empleados son los adecuados para valorar la compensación en efectivo, una indicación del valor al que conducen dichos métodos y una opinión sobre la importancia relativa atribuida a esos métodos en la determinación del valor considerado; y

- 3° Una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan planteado.
4. El informe podrá contener una valoración sobre la suficiencia de las garantías ofrecidas, en su caso, a los acreedores.
5. El experto estará facultado para obtener de la sociedad toda la información necesaria para cumplir con su labor pericial.
6. Este informe no será necesario:
 - (i) cuando así lo hayan acordado todos los socios con derecho de voto de la sociedad o sociedades participantes y, además, todas las personas que, en su caso, según la ley o los estatutos sociales, fueran titulares de ese derecho; o
 - (ii) cuando así se establezca en el régimen particular de cada modificación estructural.

Artículo 7. Publicidad preparatoria del acuerdo

1. Al menos un mes antes de la fecha de la junta general que vaya a acordar una modificación estructural, los administradores de la sociedad o sociedades participantes están obligados a insertar en la página web de dicha sociedad o sociedades además de los que se especifiquen para cada tipo de modificación estructural, los siguientes documentos:

1° El proyecto de modificación estructural;

2° Un anuncio por el que se informe a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad, o, cuando no existan tales representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, observaciones relativas al proyecto; y

3° El informe de experto independiente, cuando proceda, excluyendo, en su caso, la información confidencial que contuviera.

La inserción de dichos documentos en la página web deberá mantenerse hasta que finalice el plazo para el ejercicio por los acreedores de los derechos que les correspondan.

2. El hecho de la inserción de esos documentos en la página web se publicará de forma gratuita en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", con expresión de la página web en que figure y de la fecha de la inserción. La inserción en la web del proyecto y la fecha de la misma se acreditarán mediante la certificación del contenido de aquélla, remitido al correspondiente Registro Mercantil, debiéndose publicar en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la última certificación.

3. Los administradores también pueden depositar dicha información voluntariamente en el Registro Mercantil correspondiente a cada una de ellas.

4. Si la sociedad o sociedades que participan en la modificación estructural careciera de página web, los administradores están obligados a depositar los documentos previstos en el apartado 1 en el Registro Mercantil de su domicilio social. Efectuado el depósito, el registrador comunicará al registrador mercantil central, para su inmediata publicación gratuita en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", el hecho del depósito y la fecha en que hubiere tenido lugar.

5. La publicación del anuncio de convocatoria de las juntas de socios que hayan de resolver sobre la fusión o la comunicación individual de ese anuncio a los socios no podrá realizarse antes de la publicación de la inserción o del depósito de la documentación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".

6. Los documentos previstos en el apartado 1 podrán presentarse telemáticamente en el Registro Mercantil competente con la firma electrónica cualificada de quienes los suscriban.
7. El acceso a la documentación depositada en el Registro Mercantil o a la información presentada en el mismo será público y gratuito mediante el sistema de interconexión de registros.
8. Los aranceles registrales por la publicidad prevista en los apartados anteriores no podrán superar la recuperación del coste de la prestación de tales servicios.

Sección 2ª. Del acuerdo de modificación estructural y de la validez de la operación

Artículo 8. Aprobación por la junta general

1. Las modificaciones estructurales deben ser acordadas necesariamente por la junta de socios, con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad o sociedades que participen en dicha operación, con las salvedades previstas en esta Ley.
2. La junta general de la sociedad tomará nota de los informes de administradores y, en su caso, de las opiniones presentadas por los trabajadores o sus representantes en relación con dichos informes. Asimismo, tomará nota de los informes de los expertos independientes, así como de las observaciones presentadas, en su caso, por socios, acreedores o trabajadores. A la vista de todo ello, la junta general de la sociedad acordará la aprobación o no del proyecto de modificación estructural.
3. La junta general podrá reservarse el derecho a supeditar la ejecución de la operación a la ratificación expresa por la propia junta de las disposiciones que regulan la implicación y participación de los trabajadores.
4. En las sociedades anónimas, para la aprobación del proyecto por la junta general, será necesaria en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. Cuando el capital presente o representado alcance, al menos, el cincuenta por ciento, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.
5. En las sociedades de responsabilidad limitada, la aprobación del proyecto por la junta general requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
6. Los estatutos sociales podrán elevar los quorum y mayorías previstas en los dos apartados anteriores siempre que no superen el noventa por ciento de los derechos de voto que corresponden al capital social presente o representado en la junta general.
7. Todo cambio del proyecto de modificación estructural requerirá la misma mayoría.

Artículo 9. Validez

1. No podrá declararse la nulidad de una modificación estructural una vez inscrita.
2. Quedan a salvo, en su caso, los derechos de los socios y terceros al resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

3. También queda a salvo la aplicación de las disposiciones de derecho penal, la prevención y lucha contra la financiación del terrorismo y derecho laboral y tributario, para imponer medidas y sanciones después de la fecha en que haya surtido efectos la modificación estructural.

Sección 3º. De la protección de los socios y los acreedores

Artículo 10. Protección de los socios

1. En los casos expresamente previstos en esta ley, los socios dispondrán de un derecho a enajenar sus acciones, participaciones o, en su caso, cuotas, a la sociedad a la que pertenezcan o a los socios o terceros que esta proponga a cambio de una compensación en efectivo adecuada, siempre que hayan votado en contra de la aprobación del correspondiente proyecto. Este mismo derecho corresponde a los titulares de acciones o participaciones sin voto.

2. Los socios que pretendan ejercitar el derecho a enajenar sus acciones, participaciones o, en su caso, cuotas, deberán comunicarlo a la sociedad en el plazo de 20 días desde la publicación del acuerdo de modificación estructural adoptado. La sociedad dispondrá de una dirección electrónica a la que los socios puedan comunicar su decisión.

3. La compensación en efectivo establecida en el correspondiente proyecto de modificación se abonará dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha en que surta efecto la modificación.

4. Cuando el socio que haya declarado su voluntad de ejercer el derecho de enajenación de sus acciones, participaciones o, en su caso, cuotas, considere que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad no se ha fijado adecuadamente, tendrá derecho a reclamar una compensación en efectivo complementaria ante el Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la sociedad o el tribunal arbitral estatutariamente previsto, dentro del plazo de dos meses desde la fecha en que hayan recibido o hubieran debido recibir la compensación inicial.

5. El mismo Juzgado o, en su caso, el tribunal arbitral, será competente para conocer de cualquier controversia suscitada por la sociedad o los socios en torno a las cuestiones reguladas en este artículo. La competencia del Juzgado tiene carácter de competencia judicial exclusiva.

6. La sentencia firme que estime la procedencia de una compensación en efectivo complementaria extenderá sus efectos a todos los socios que hayan declarado su voluntad de ejercer el derecho de enajenación de sus acciones o participaciones.

Artículo 11. Protección de los acreedores

1. Los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del correspondiente proyecto, aun no hayan vencido en el momento de dicha publicación, que no estén conformes con las garantías ofrecidas en aquel proyecto y hayan notificado a la sociedad su disconformidad, podrán, dentro del plazo de 3 meses a partir de dicha publicación, ejercer sus derechos conforme a las siguientes reglas:

1º Si se ha emitido informe de experto independiente sobre las garantías considerándolas inadecuadas, podrán acudir al Registrador Mercantil del domicilio social, el cual dará traslado en el plazo de 5 días a la sociedad para que ésta en el plazo 15 días pueda, en su caso, ampliarlas u ofrecer otras nuevas.

Si tras ello el acreedor sigue insatisfecho, podrá en el plazo de 10 días solicitar al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social que determine, por los trámites previstos para el juicio verbal en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las garantías que, en su caso, deba prestar la sociedad. El Juzgado comunicará al Registrador Mercantil la presentación de la demanda para que deje constancia de ello mediante la correspondiente nota marginal.

2° Si se ha emitido informe de experto independiente sobre las garantías considerándolas adecuadas, el acreedor disconforme podrá acudir al Juzgado de lo Mercantil, el cual tramitará el procedimiento y realizará la comunicación al Registrador Mercantil conforme a lo previsto en el número 1°.

3° Si no se ha emitido informe de experto independiente sobre las garantías los acreedores, dentro del plazo de 3 meses desde la publicación del proyecto, podrán solicitar del Registrador Mercantil que nombre un experto independiente en el plazo de cinco días. El experto se pronunciará en el plazo de 20 días en un único informe sobre la adecuación de las garantías de todos los acreedores que lo hayan solicitado. Si el informe de este experto considera que las garantías son inadecuadas, se estará a lo previsto en el número 1°, y si considera que son adecuadas, a lo previsto en el número 2°. El coste de dicho informe será a cargo de la sociedad, salvo que esta hubiera hecho la declaración sobre la situación financiera prevista en esta Ley, el informe del experto considere las garantías adecuadas o el juez, en su caso, aprecie falta manifiesta de necesidad porque las garantías que se ofrecieron en el proyecto eran claramente adecuadas.

2. El ejercicio de los derechos previstos en este artículo no paralizará la operación de modificación estructural.

3. Los obligacionistas podrán ejercer sus derechos en los mismos términos que los restantes acreedores, salvo que la modificación estructural hubiere sido aprobada por la asamblea de obligacionistas.

Artículo 12. Adecuación y eficacia de las garantías

1. Los acreedores, para que se le concedan o completen las garantías de sus créditos, deberán demostrar que la satisfacción de sus derechos está en riesgo debido a la modificación estructural y que no han obtenido garantías adecuadas de la sociedad. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las garantías son adecuadas o necesarias cuando el informe de experto independiente haya constatado esa adecuación o la sociedad haya emitido la declaración sobre la situación financiera en los términos previstos en el siguiente artículo.

2. El juez, al valorar las garantías y su necesidad tendrá en cuenta si el crédito del acreedor frente a la sociedad, un garante o un tercero, tiene un valor al menos equivalente y una calidad crediticia proporcional a la que tenía antes de la operación.

3. En todo caso, la eficacia de estas garantías quedará supeditada a que la modificación estructural surta efecto.

Artículo 13. Declaración sobre la situación financiera

1. El órgano de administración de la sociedad que realice o participe en una operación podrá adjuntar para su publicación junto con el proyecto una declaración que refleje con exactitud la situación financiera actual en una fecha no anterior a un mes antes de la publicación de dicha declaración. En ella se hará constar que sobre la base de la información a su disposición y después de haber efectuado las averiguaciones que sean razonables, no conoce ningún motivo por el que la sociedad, después de que la operación surta efecto, no pueda responder de sus obligaciones al vencimiento de estas.

2. Tratándose de una escisión, la declaración del órgano de administración se referirá además a la capacidad de la o las sociedades beneficiarias de responder de las obligaciones que se le hayan atribuido en virtud del proyecto de escisión al vencimiento de estas.

TÍTULO II DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES INTERNAS

CAPÍTULO I De la transformación por cambio de tipo social

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 14. Concepto

En virtud de la transformación una sociedad adopta un tipo social distinto, conservando su personalidad jurídica.

Artículo 15. Supuestos de posible transformación

1. Una sociedad mercantil inscrita podrá transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil.
2. Una sociedad mercantil inscrita, así como una agrupación europea de interés económico, podrán transformarse en agrupación de interés económico. Igualmente, una agrupación de interés económico podrá transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil y en agrupación europea de interés económico.
3. Una sociedad civil podrá transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil.
4. Una sociedad anónima podrá transformarse en sociedad anónima europea. Igualmente, una sociedad anónima europea podrá transformarse en sociedad anónima.
5. Una sociedad cooperativa podrá transformarse en sociedad mercantil, y una sociedad mercantil inscrita en sociedad cooperativa.
6. Una sociedad cooperativa podrá transformarse en sociedad cooperativa europea y una sociedad cooperativa europea podrá transformarse en sociedad cooperativa.

Artículo 16. Transformaciones entre sociedad anónima y sociedad anónima europea

La transformación de sociedades anónimas en sociedades anónimas europeas y viceversa se registrará por lo dispuesto en el Reglamento (CE) número 2157/2001 y por las normas que lo desarrollan, y por lo dispuesto en la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

Sección 2ª. Del proyecto y del informe de la transformación

Artículo 17. Proyecto de transformación

1. El proyecto contendrá, además de las menciones enumeradas en las disposiciones comunes, las siguientes:
 - 1.º En su caso, los datos identificadores de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
 - 2.º El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la transformación, así como, en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento público.

3.º El balance de la sociedad a transformar, que deberá estar cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista para la reunión, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad al mismo.

4º El informe del auditor de cuentas sobre el balance presentado, cuando la sociedad que se transforme esté obligada a someter sus cuentas a auditoría.

2. No será necesario que el Proyecto contenga ofrecimiento de garantías a los acreedores.

Artículo 18. Informe del órgano de administración

1. El informe contendrá las menciones enumeradas en las disposiciones comunes del Título I.

2. Los administradores de la sociedad están obligados a informar a la junta de socios a la que se someta la aprobación de la transformación, sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo acaecida entre la fecha del informe justificativo de la transformación y del balance puestos a disposición de los socios y la fecha de la reunión de la junta.

3. No será precisa la puesta a disposición o envío de la información a que se refiere el apartado primero cuando el acuerdo de transformación se adopte en junta universal y por unanimidad.

Artículo 19. Informe de experto independiente

El informe de experto independiente en la transformación tendrá carácter facultativo.

Sección 3ª. Del acuerdo de transformación y protección de los socios

Artículo 20. Requisitos del acuerdo de transformación

1. El acuerdo de transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se transforma.

2. El acuerdo deberá incluir la aprobación del balance de la sociedad presentado para la transformación, con las modificaciones que en su caso resulten procedentes, así como de las menciones exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte.

Artículo 21. Publicación del acuerdo de transformación

1. El acuerdo de transformación se publicará en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de gran circulación de la provincia en que la sociedad tenga su domicilio.

2. La publicación no será necesaria cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y, en su caso, a los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, participaciones o cuotas que no puedan mantenerse después de la transformación, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad, así como a todos los acreedores en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales.

Artículo 22. Impugnación del acuerdo

No constituirán por sí solos, individual o conjuntamente, motivos de impugnación del acuerdo de transformación, los siguientes:

1º La fijación de forma inadecuada de la compensación en efectivo ofrecida en el proyecto por la enajenación de las acciones o participaciones de los socios, o

2º El incumplimiento de los requisitos legales en la información facilitada sobre dicha compensación en efectivo.

Artículo 23. Protección de los socios

1. Los socios y los titulares de acciones o participaciones sin voto tendrán derecho a enajenar sus acciones o participaciones a la sociedad o a los socios o terceros que esta proponga a cambio de una compensación en efectivo adecuada, en los términos previstos para la protección de socios en las disposiciones comunes.

2. Los socios que por efecto de la transformación hubieran de asumir una responsabilidad personal por las deudas sociales y no hubieran votado a favor del acuerdo de transformación quedarán automáticamente separados de la sociedad, si no se adhieren fehacientemente a él dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de su adopción cuando hubieren asistido a la junta de socios, o desde la comunicación de ese acuerdo cuando no hubieran asistido. La valoración de las acciones o participaciones correspondientes a los socios que resulten separados se hará conforme a lo previsto en las disposiciones comunes.

Artículo 24. Subsistencia de las obligaciones de los socios

1. La transformación por sí sola no liberará a los socios del cumplimiento de sus obligaciones frente a la sociedad.

2. Si el tipo social en que se transforma la sociedad exige el desembolso íntegro del capital social, habrá de procederse al desembolso con carácter previo al acuerdo de transformación o, en su caso, a una reducción de capital con finalidad de condonación de dividendos pasivos. En el primer caso, la realidad de los desembolsos efectuados se acreditará ante el notario autorizante de la escritura pública y los documentos acreditativos se incorporarán a la misma en original o testimonio.

Artículo 25. Participación de los socios en la sociedad transformada

1. El acuerdo de transformación no podrá modificar la participación social de los socios si no es con el consentimiento de todos los que permanezcan en la sociedad.

2. En el caso de una sociedad con uno o más socios industriales que se transforme en un tipo social en el que no existan tales socios, la participación de éstos en el capital de la nueva sociedad transformada será la que corresponda a la cuota de participación que les hubiera sido asignada en la escritura de constitución de la sociedad o, en su defecto, la que se convenga entre todos los socios, reduciéndose proporcionalmente en ambos casos la participación de los demás socios.

La subsistencia, en su caso, de la obligación personal del socio industrial en la sociedad una vez transformada exigirá siempre el consentimiento del socio y deberá instrumentarse como prestación accesoria en las condiciones que se establezcan en los estatutos sociales.

Artículo 26. Sociedades que tuvieran emitidas obligaciones u otros valores

La transformación de una sociedad que tuviera emitidas obligaciones u otros valores en otro tipo social al que no le esté permitido emitirlos y la de una sociedad anónima que tuviera emitidas obligaciones convertibles en acciones en otro tipo social diferente, sólo podrán acordarse si previamente se hubiera procedido a la amortización o a la conversión, en su caso, de las obligaciones emitidas.

Artículo 27. Titulares de derechos especiales

1. La transformación no podrá tener lugar si, dentro del mes siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» del acuerdo de la misma o del envío de la comunicación individual por escrito, se opusieran titulares de derechos especiales distintos de las acciones, de las participaciones o de las cuotas que no puedan mantenerse después de la transformación.
2. Esa oposición no producirá efecto alguno si es realizada por un socio que hubiere votado a favor de la transformación.

Artículo 28. Modificaciones adicionales a la transformación

1. La transformación de la sociedad podrá ir acompañada de la incorporación de nuevos socios.
2. Cuando la transformación vaya acompañada de la modificación del objeto, el domicilio, el capital social u otros extremos de la escritura o de los estatutos, habrán de observarse los requisitos específicos de esas operaciones conforme a las disposiciones que rijan el nuevo tipo social.

Sección 4ª. De la formalización y de la inscripción de la transformación

Artículo 29. Escritura pública de transformación

1. La escritura pública de transformación habrá de ser otorgada por la sociedad y por todos los socios que pasen a responder personalmente de las deudas sociales.
2. Además de las menciones exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte, la escritura pública de transformación habrá de contener la relación de socios que hubieran quedado automáticamente separados y el capital que representen, así como la cuota, las acciones o participaciones que se atribuyan a cada socio en la sociedad transformada.
3. Si las normas sobre la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte así lo exigieran, se incorporará a la escritura el informe de los expertos independientes sobre el patrimonio social.

Artículo 30. Eficacia de la transformación

La eficacia de la transformación quedará supeditada a la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil.

Sección 5ª. Efectos de la transformación sobre la responsabilidad de los socios

Artículo 31. Responsabilidad de los socios por las deudas sociales y protección de acreedores

1. Los socios que en virtud de la transformación asuman responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales responderán en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación.
2. Salvo que los acreedores sociales hayan consentido expresamente la transformación, subsistirá la responsabilidad de los socios que respondían personalmente de las deudas de la sociedad transformada por las deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación de la sociedad. Esta responsabilidad prescribirá a los cinco años a contar desde la publicación de la transformación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
3. No serán aplicables las disposiciones comunes sobre protección de acreedores.

CAPÍTULO II DE LA FUSIÓN

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 32. Concepto

En virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de nueva creación o una de las sociedades que se fusionan.

Artículo 33. Clases de fusión

1. La fusión en una nueva sociedad implicará la extinción de cada una de las sociedades que se fusionan y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad, que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas.
2. Si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán, aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda.

Artículo 34. Continuidad en la participación

1. Los socios de las sociedades extinguidas se integrarán en la sociedad resultante de la fusión, recibiendo un número de acciones o participaciones, o una cuota, en proporción a su respectiva participación en aquellas sociedades.
2. En el caso de una sociedad con uno o más socios industriales que se fusione en otra en la que no puedan existir tales socios, la participación de éstos en el capital de la sociedad resultante de la fusión se determinará atribuyendo a cada uno de ellos la participación en el capital de la sociedad extinguida correspondiente a la cuota de participación que le hubiera sido asignada en la escritura de constitución, o en su defecto, la que se convenga entre todos los socios de dicha sociedad, reduciéndose proporcionalmente en ambos casos la participación de los demás socios.

La subsistencia, en su caso, de la obligación personal del socio industrial en la sociedad que resulte de la fusión, exigirá siempre el consentimiento del socio y deberá instrumentarse como prestación accesoria cuando no puedan existir socios industriales.

Artículo 35. Tipo de canje

1. En las operaciones de fusión el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que participan en la misma debe establecerse sobre la base del valor razonable de su patrimonio.
2. Cuando sea conveniente para ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una compensación en dinero que no exceda del diez por ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas.

Artículo 36. Prohibición de canje de participaciones propias

Las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que se fusionan, que estuvieran en poder de cualquiera de ellas o en poder de otras personas que actuasen en su propio nombre, pero por cuenta de esas sociedades, no podrán canjearse por acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante de la fusión y, en su caso, deberán ser amortizadas o extinguidas.

Artículo 37. Aplicación de legislación sectorial

Serán de aplicación a las fusiones de sociedades mercantiles los requisitos que, en su caso, se exijan en la legislación sectorial.

Sección 2.ª Del proyecto de fusión

Artículo 38. Proyecto común de fusión

1. Los administradores de cada una de las sociedades que participen en la fusión habrán de redactar y suscribir un proyecto común de fusión. Si falta la firma de alguno de ellos, se señalará al final del proyecto, con indicación de la causa.

2. Una vez suscrito el proyecto común de fusión, los administradores de las sociedades que se fusionen se abstendrán de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la relación de canje de las acciones, participaciones o cuotas.

3. El proyecto de fusión quedará sin efecto si no hubiera sido aprobado por las juntas de socios de todas las sociedades que participen en la fusión dentro de los seis meses siguientes a su fecha.

Artículo 39. Contenido del proyecto común de fusión

El proyecto común de fusión además de las menciones contempladas en las disposiciones comunes incluirá:

1º Los datos identificadores de la inscripción de las sociedades participantes en el Registro Mercantil.

2º Los de la sociedad resultante de la fusión o, en su caso, el proyecto de escritura y estatutos de la sociedad de nueva creación.

3º El tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, la compensación complementaria en dinero que se hubiera previsto y, en su caso, el procedimiento de canje.

4º La incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la sociedad resultante.

5º La fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones, participaciones o cuotas tendrán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho.

6º La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables.

8º La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante.

9º Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión.

Artículo 40. Informe de los administradores sobre el proyecto de fusión

Los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión elaborarán un informe en el que, además de lo previsto en las disposiciones comunes, se explicará y justificará detalladamente el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, el método o métodos empleados para determinarlo y, en su caso, las especiales dificultades de valoración que pudieran existir.

Artículo 41. Informe de expertos sobre el proyecto de fusión

1. Cuando alguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o comanditaria por acciones, los administradores de cada una de las sociedades que se fusionan deberán solicitar del registrador mercantil correspondiente al domicilio social el nombramiento de uno o varios expertos independientes y distintos, para que, por separado, emitan informe sobre el proyecto común de fusión.

No obstante lo anterior, los administradores de todas las sociedades que se fusionan a que se refiere el apartado anterior podrán pedir al registrador mercantil que designe uno o varios expertos para la elaboración de un único informe. La competencia para el nombramiento corresponderá al registrador mercantil del domicilio social de la sociedad absorbente o del que figure en el proyecto común de fusión como domicilio de la nueva sociedad.

2. Los expertos nombrados podrán obtener de las sociedades que participan en la fusión, sin limitación alguna, toda la información necesaria para cumplir con su labor pericial.

3. El informe del experto o de los expertos estará dividido en dos partes: en la primera, deberá exponer los métodos seguidos por los administradores para establecer el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas de los socios de las sociedades que se extinguen, explicar si esos métodos son adecuados, con expresión de los valores a los que conducen y, si existieran, las dificultades especiales de valoración, y manifestar la opinión de si el tipo de canje está o no justificado; y en la segunda, deberá manifestar la opinión de si el patrimonio de las sociedades que se extinguen es igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad absorbente.

4. El contenido del informe del experto o de los expertos sobre el proyecto de fusión estará integrado únicamente por la segunda parte cuando, en todas las sociedades que participen en la fusión, así lo hayan acordado todos los socios con derecho de voto y, además, todas las personas que, en su caso, según la ley o los estatutos sociales, fueran titulares de ese derecho.

5. En los demás casos el informe será facultativo.

Artículo 42. Fusión posterior a una adquisición de sociedad con endeudamiento de la adquirente

En caso de fusión entre dos o más sociedades, si alguna de ellas hubiera contraído deudas en los tres años inmediatamente anteriores para adquirir el control de otra que participe en la operación de fusión o para adquirir activos de la misma esenciales para su normal explotación o que sean de importancia por su valor patrimonial, serán de aplicación las siguientes reglas:

1.^a El proyecto de fusión deberá indicar los recursos y los plazos previstos para la satisfacción por la sociedad resultante de las deudas contraídas para la adquisición del control o de los activos.

2.^a El informe de los administradores sobre el proyecto de fusión debe indicar las razones que hubieran justificado la adquisición del control o de los activos y que justifiquen, en su caso, la operación de fusión y contener un plan económico y financiero, con expresión de los recursos y la descripción de los objetivos que se pretenden conseguir.

3.^a El informe de los expertos sobre el proyecto de fusión debe contener un juicio sobre la razonabilidad de las indicaciones a que se refieren los dos números anteriores, determinando además si existe asistencia financiera.

Sección 3.^a Del balance de fusión

Artículo 43. Balance de fusión

1. El último balance de ejercicio aprobado podrá considerarse balance de fusión, siempre que hubiere sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión.

Si el balance anual no cumpliera con ese requisito, será preciso elaborar un balance cerrado con posterioridad al primer día del tercer mes precedente a la fecha del proyecto de fusión, siguiendo los mismos métodos y criterios de presentación del último balance anual.

2. En ambos casos podrán modificarse las valoraciones contenidas en el último balance en atención a las modificaciones importantes del valor razonable que no aparezcan en los asientos contables.

3. Si en la fusión participan una o varias sociedades anónimas cotizadas cuyos valores estén ya admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en un mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, el balance de fusión podrá ser sustituido por el informe financiero semestral de cada una de ellas exigido por la legislación sobre mercado de valores, siempre que dicho informe hubiere sido cerrado y hecho público dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión. El informe se pondrá a disposición de los accionistas en la misma forma que la establecida para el balance de fusión.

Artículo 44. Verificación y aprobación del balance

El balance de fusión y las modificaciones de las valoraciones contenidas en el mismo deberán ser verificados por el auditor de cuentas de la sociedad, cuando exista obligación de auditar, y habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta de socios que resuelva sobre la fusión a cuyos efectos deberá mencionarse expresamente en el orden del día de la junta.

Artículo 45. Impugnación del balance de fusión

La impugnación del balance de fusión no podrá suspender por sí sola la ejecución de la fusión.

Sección 4.^a Del acuerdo de fusión

Artículo 46. Información sobre la fusión

1. Antes de la publicación del anuncio de convocatoria de las juntas de socios que hayan de resolver sobre la fusión o de la comunicación individual de ese anuncio a los socios, los administradores deberán insertar en la página web de la sociedad, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos o, si no tuviera página web, poner a disposición de los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, en el domicilio social, además de los especificados en las disposiciones comunes, los siguientes documentos:

1.º Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades en las que fueran legalmente exigibles.

2.º El balance de fusión de cada una de las sociedades, cuando sea distinto del último balance anual aprobado, acompañado, si fuera exigible, del informe de auditoría o, en el caso de fusión de sociedades cotizadas, el informe financiero semestral por el que el balance se hubiera sustituido.

3.º Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública y, en su caso, los pactos relevantes que vayan a constar en documento público.

4.º El proyecto de escritura de constitución de la nueva sociedad o, si se trata de una absorción, el texto íntegro de los estatutos de la sociedad absorbente o, a falta de estos, de la escritura por la que se rija, incluyendo destacadamente las modificaciones que hayan de introducirse.

5.º La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

2. Si la sociedad no tuviera página web, los socios, los obligacionistas, los titulares de derechos especiales y los representantes de los trabajadores que así lo soliciten por cualquier medio admitido en Derecho tendrán derecho al examen en el domicilio social de copia íntegra de los documentos a que se refiere el apartado anterior, así como a la entrega o al envío gratuitos de un ejemplar de cada uno de ellos.

3. Las modificaciones importantes del activo o del pasivo acaecidas en cualquiera de las sociedades que se fusionan, entre la fecha de redacción del proyecto de fusión y la de la reunión de la junta de socios que haya de aprobarla, habrán de comunicarse a la junta de todas las sociedades que se fusionan. A tal efecto, los administradores de la sociedad en que se hubieran producido las modificaciones deberán ponerlas en conocimiento de los administradores de las restantes sociedades para que puedan informar a sus respectivas juntas. Esta información no será exigible cuando, en todas y cada una de las sociedades que participen en la fusión, lo acuerden todos los socios con derecho de voto y, en su caso, quienes de acuerdo con la ley o los estatutos pudieran ejercer legítimamente ese derecho.

Artículo 47. Acuerdo de fusión

1. La fusión habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de cada una de las sociedades que participen en ella, ajustándose estrictamente al proyecto común de fusión, con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de las sociedades que se fusionan. Cualquier acuerdo de una sociedad que modifique el proyecto de fusión equivaldrá al rechazo de la propuesta.

2. La publicación de la convocatoria de la junta o la comunicación individual de ese anuncio a los socios habrán de realizarse con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha prevista para la celebración de la junta; deberán incluir las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas; y harán constar la fecha de inserción de los documentos indicados en el artículo anterior en la página web de la sociedad o, si ésta no tuviera página web, el derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social copia de esos documentos, así como a obtener la entrega o el envío gratuitos de los mismos.

3. Cuando la fusión se realice mediante la creación de una nueva sociedad, el acuerdo de fusión deberá incluir las menciones legalmente exigidas para la constitución de aquélla.

Artículo 48. Exigencias especiales del acuerdo de fusión

1. El acuerdo de fusión exigirá, además, el consentimiento de todos los socios que, por virtud de la fusión, pasen a responder ilimitadamente de las deudas sociales, así como el de los socios de las sociedades que se extingan que hayan de asumir obligaciones personales en la sociedad resultante de la fusión.

2. También será necesario el consentimiento individual de los titulares de derechos especiales distintos de las acciones o participaciones cuando no disfruten, en la sociedad resultante de la fusión, de derechos equivalentes a los que les correspondían en la sociedad extinguida, a no ser que la modificación de tales derechos hubiera sido aprobada, en su caso, por la asamblea de esos titulares.

Artículo 49. Acuerdo unánime de fusión

1. El acuerdo de fusión podrá adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la ley y sin informe de los administradores sobre el proyecto de fusión cuando se adopte, en cada una de las sociedades que participan en la fusión, en junta universal y por unanimidad de todos los socios con derecho de voto y, en su caso, de quienes de acuerdo con la ley o los estatutos pudieran ejercer legítimamente ese derecho.
2. Los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo, no podrán ser restringidos por el hecho de que la fusión sea aprobada en junta universal.

Artículo 50. Publicación del acuerdo

1. El acuerdo de fusión, una vez adoptado, se publicará en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de gran circulación en las provincias en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio. En el anuncio se hará constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión.
2. No será necesaria la publicación a que se refiere el apartado anterior cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

Artículo 51. Impugnación de los acuerdos

No constituirán por sí solos, individual o conjuntamente, motivos de impugnación del acuerdo de fusión, los siguientes:

- 1º La fijación inadecuada de la relación de canje, o
- 2º El incumplimiento de los requisitos legales en la información facilitada sobre la relación de canje.

Artículo 52. Protección de los socios en la relación de canje

1. Los socios de las sociedades que se fusionen que consideren que la relación de canje establecida en el proyecto no es adecuada pueden impugnarla y reclamar un pago en efectivo, siempre que no hayan votado a favor de la aprobación del acuerdo de fusión o no tengan derecho de voto. 2.
2. Dichos socios tendrán derecho a reclamar una compensación en efectivo complementaria ante el Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la sociedad o el tribunal arbitral estatutariamente previsto, dentro del plazo de dos meses desde la fecha en que hayan recibido o hubieran debido recibir la compensación inicial.
3. El mismo Juzgado o, en su caso, tribunal arbitral será competente para conocer de cualquier controversia suscitada por la sociedad o los socios en torno a las cuestiones reguladas en este artículo. La competencia del Juzgado tiene carácter de competencia judicial exclusiva.
4. La impugnación de la relación de canje no impedirá la inscripción de la fusión en el Registro.
5. La sociedad resultante podrá compensar a los socios con acciones o participaciones propias en lugar del pago en efectivo.
6. La sentencia sobre la relación de canje será vinculante para la sociedad resultante de la fusión y la relación de canje que en ella se establezca tendrá efectos para todos los socios.

Artículo 53. Protección de los acreedores

En los casos en que no sea necesaria la publicación del proyecto de fusión, la fecha de nacimiento del crédito a los efectos de la protección de los acreedores deberá ser anterior a la fecha de publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual de ese acuerdo al acreedor.

Sección 5.ª De la formalización e inscripción de la fusión

Artículo 54. Escritura pública de fusión

1. Las sociedades que se fusionan elevarán el acuerdo de fusión adoptado a escritura pública, a la cual se incorporará el balance de fusión de aquéllas o, en el caso de fusión de sociedades cotizadas, el informe financiero semestral por el que el balance se hubiera sustituido.

2. Si la fusión se realizara mediante la creación de una nueva sociedad, la escritura deberá contener, además, las menciones legalmente exigidas para la constitución de la misma en atención al tipo elegido.

Si se realizara por absorción, la escritura contendrá las modificaciones estatutarias que se hubieran acordado por la sociedad absorbente con motivo de la fusión y el número, clase y serie de las acciones o las participaciones o cuotas que hayan de ser atribuidas, en cada caso, a cada uno de los nuevos socios.

Artículo 55. Inscripción de la fusión

1. La eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente.

2. Una vez inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas.

Sección 6.ª Efectos de la fusión sobre la responsabilidad de los socios

Artículo 56. Responsabilidad por las deudas sociales anteriores a la fusión

Salvo que los acreedores sociales hayan consentido de modo expreso la fusión, los socios responsables personalmente de las deudas de las sociedades que se extingan por la fusión contraídas con anterioridad a esa fusión, continuarán respondiendo de esas deudas. Esta responsabilidad prescribirá a los cinco años a contar desde la publicación de la fusión en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Sección 7.ª De las fusiones especiales

Artículo 57. Absorción de sociedad íntegramente participada

1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular de forma directa o indirecta de todas las acciones o participaciones sociales en que se divida el capital de la sociedad o sociedades absorbidas o cuando una persona sea titular directa o indirectamente de todas las acciones de la sociedad absorbente y de las sociedades absorbidas, y la sociedad absorbente no asigne acciones o participaciones en virtud de la fusión, la operación podrá realizarse sin necesidad de que concurran los siguientes requisitos:

1.º La inclusión en el proyecto de fusión de las menciones relativas al tipo de canje de las acciones o participaciones, a las modalidades de entrega de las acciones o participaciones de la sociedad resultante a los socios de la sociedad o sociedades absorbidas, a la fecha de participación en las

ganancias sociales de la sociedad resultante o a cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho o a la información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmite a la sociedad resultante o a las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan.

2.º Los informes de administradores y expertos sobre el proyecto de fusión.

3.º El aumento de capital de la sociedad absorbente.

4.º La aprobación de la fusión por las juntas generales de la sociedad o sociedades absorbidas.

2. Cuando la sociedad absorbente fuese titular de forma indirecta de todas las acciones o participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbida, además de tener en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior, será siempre necesario el informe de expertos y será exigible, en su caso, el aumento de capital de la sociedad absorbente. Cuando la fusión provoque una disminución del patrimonio neto de sociedades que no intervienen en la fusión por la participación que tienen en la sociedad absorbida, la sociedad absorbente deberá compensar a estas últimas sociedades por el valor razonable de esa participación.

Artículo 58. Absorción de sociedad participada al noventa por ciento

1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de la totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorción, no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión, siempre que en éste se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las sociedades absorbidas la adquisición de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil.

2. En el proyecto de fusión deberá constar el valor establecido para la adquisición de las acciones o participaciones sociales. Los socios que manifiesten la voluntad de transmitir las acciones o participaciones sociales a la sociedad absorbente, pero que no estuvieran de acuerdo con el valor que para las mismas se hubiera hecho constar en el proyecto, dispondrán de los derechos previstos en las disposiciones comunes para la protección de socios.

3. Las acciones o participaciones de los socios de la sociedad absorbida que no fueran adquiridas deberán ser canjeadas por acciones o participaciones propias que la absorbente tuviera en cartera. En otro caso, y siempre que no tenga que celebrarse la junta a solicitud de la minoría, los administradores están autorizados, si así lo prevé el proyecto de fusión, a elevar el capital en la medida estrictamente necesaria para el canje.

Artículo 59. Junta de socios de la sociedad absorbente

1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más del capital social de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorción, no será necesaria la aprobación de la fusión por la junta de socios de la sociedad absorbente, siempre que con un mes de antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la junta o juntas de las sociedades absorbidas que deban pronunciarse sobre el proyecto de fusión, o, en caso de sociedad íntegramente participada, a la fecha prevista para la formalización de la absorción, se hubiera publicado el proyecto por cada una de las sociedades participantes en la operación con un anuncio, publicado en la página web de la sociedad o, caso de no existir, en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" o en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio, en el que se haga constar el derecho que corresponde a los socios de la sociedad absorbente y a los acreedores de las sociedades que participan en la fusión a examinar en el domicilio social el proyecto común y las cuentas anuales y los informes

de gestión de los últimos tres ejercicios, así como los informes de los correspondientes auditores de las sociedades en que fueran legalmente exigibles y, en su caso, los informes de los administradores, los informes de los expertos independientes, o los balances de fusión cuando fueran distintos del último balance aprobado, o, en caso de sociedad cotizada, el informe financiero semestral, así como a obtener cuando no se haya publicado en la página web, la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

En el anuncio deberá mencionarse el derecho de los socios que representen, al menos, el uno por ciento del capital social a exigir la celebración de la junta de la sociedad absorbente para la aprobación de la absorción en el plazo de un mes desde la publicación del proyecto en los términos establecidos en esta Ley.

2. Los administradores de la sociedad absorbente estarán obligados a convocar la junta para que apruebe la absorción cuando, dentro de los quince días siguientes a la publicación del último de los anuncios a los que se refiere el apartado anterior, lo soliciten socios que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. En este supuesto, la junta debe ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los administradores para convocarla.

Artículo 60. Supuestos asimilados a la absorción de sociedades íntegramente participadas.

1. Lo dispuesto para la absorción de sociedades íntegramente participadas será de aplicación, en la medida que proceda, a la fusión, en cualquiera de sus clases, de sociedades íntegramente participadas de forma directa o indirecta por el mismo socio o por socios que tengan idéntica participación en todas las sociedades que se fusionen, así como a la fusión por absorción cuando la sociedad absorbida fuera titular de forma directa o indirecta de todas las acciones o participaciones de la sociedad absorbente.

2. Cuando la sociedad absorbida fuese titular de forma indirecta de todas las acciones o participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbente o cuando las sociedades absorbida y absorbente estén participadas indirectamente por el mismo socio, será siempre necesario el informe de expertos y será exigible, en su caso, el aumento de capital de la sociedad absorbente. Cuando la fusión provoque una disminución del patrimonio neto de sociedades que no intervienen en la fusión por la participación que tienen en la sociedad absorbente o absorbida, la sociedad absorbente deberá compensar a dichas sociedades por el valor razonable de esa participación.

Artículo 61. Operación asimilada a la fusión

También constituye una fusión la operación mediante la cual una sociedad se extingue transmitiendo en bloque su patrimonio a la sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuotas correspondientes a aquella.

CAPITULO III De la escisión

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 62. Clases y requisitos

1. La escisión de una sociedad mercantil inscrita podrá revestir cualquiera de las siguientes modalidades:

1.ª Escisión total.

2.^a Escisión parcial.

3.^a Segregación.

2. Las sociedades beneficiarias de la escisión podrán ser de un tipo mercantil diferente al de la sociedad que se escinde.

3. Sólo podrá acordarse la escisión si las acciones o las aportaciones de los socios a la sociedad que se escinde se encuentran íntegramente desembolsadas.

Artículo 63. Escisión total

Se entiende por escisión total la extinción de una sociedad, con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se transmite en bloque por sucesión universal a una sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya existente, recibiendo los socios un número de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde y, en su caso, cuando sea conveniente para ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una compensación en dinero que no exceda del diez por ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas.

Artículo 64. Escisión parcial

1. Se entiende por escisión parcial el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes, recibiendo los socios de la sociedad que se escinde un número de acciones, participaciones o cuotas sociales de las sociedades beneficiarias de la escisión proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde y, en su caso, cuando sea conveniente para ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una compensación en dinero que no exceda del diez por ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas y reduciendo ésta el capital social en la cuantía necesaria.

2. Si la parte del patrimonio que se transmite en bloque está constituida por una o varias empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, podrán ser atribuidas a la sociedad beneficiaria las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de la empresa que se traspasa.

Artículo 65. Segregación

Se entiende por segregación el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias.

Artículo 66. Constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión del patrimonio

Se aplicarán también, en cuanto procedan, las normas de la escisión a la operación mediante la cual una sociedad transmite en bloque su patrimonio a otra sociedad de nueva creación, recibiendo a cambio todas las acciones, participaciones o cuotas de socio de la sociedad beneficiaria.

Sección 2ª. Régimen legal de la escisión

Artículo 67. Régimen jurídico de la escisión

La escisión se regirá por las normas establecidas para la fusión en esta Ley, con las salvedades contenidas en este Capítulo, entendiéndose que las referencias a la sociedad resultante de la fusión equivalen a referencias a las sociedades beneficiarias de la escisión.

Artículo 68. Proyecto de escisión

En el proyecto de escisión, además de las menciones enumeradas para el proyecto de fusión interna, se incluirán:

1º En su caso, la atribución a los socios de la sociedad escindida de acciones, participaciones o cuotas en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida, o en ambas, y el criterio en el que se base dicha atribución.

2º La descripción precisa del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida y una declaración sobre el modo en que tal patrimonio se repartirá entre las sociedades beneficiarias o seguirá en poder de la sociedad escindida en caso de escisión parcial o de escisión por segregación, incluidas las disposiciones relativas al tratamiento del patrimonio activo o pasivo no atribuidos expresamente en el proyecto, tales como activos o pasivos desconocidos en la fecha en que se elabore el proyecto.

Artículo 69. Atribución de elementos del activo y del pasivo

1. En caso de escisión total, cuando un elemento del activo no se haya atribuido a ninguna sociedad beneficiaria en el proyecto de escisión y la interpretación de este no permita decidir sobre el reparto, se distribuirá ese elemento o su contravalor entre todas las sociedades beneficiarias de manera proporcional al activo atribuido a cada una de ellas en el proyecto de escisión.

2. En caso de escisión total, cuando un elemento del pasivo no sea atribuido a alguna sociedad beneficiaria en el proyecto de escisión y la interpretación de este no permita decidir sobre su reparto, responderán solidariamente de él todas las sociedades beneficiarias.

Artículo 70. Atribución de acciones, participaciones o cuotas a los socios

En los casos de escisión total o de escisión parcial con pluralidad de sociedades beneficiarias, siempre que no se atribuyan a los socios de la sociedad que se escinde acciones, participaciones o cuotas de todas las sociedades beneficiarias, será necesario el consentimiento individual de los afectados.

Artículo 71. Informe de los administradores sobre el proyecto de escisión

En el informe sobre el proyecto de escisión que habrán de redactar los administradores de las sociedades participantes en la escisión se deberá expresar que han sido emitidos los informes sobre las aportaciones no dinerarias previstos en esta Ley para el caso de que las sociedades beneficiarias de la escisión sean anónimas o comanditarias por acciones, así como el Registro Mercantil en que esos informes estén depositados o vayan a depositarse.

Artículo 72. Informe de expertos independientes

1. Cuando las sociedades que participen en la escisión sean anónimas o comanditarias por acciones, el proyecto de escisión deberá someterse al informe de uno o varios expertos independientes designados por el Registrador mercantil del domicilio de cada una de esas sociedades. Dicho informe comprenderá, además, la valoración del patrimonio no dinerario que se transmita a cada sociedad.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los administradores de todas las sociedades que participan en la escisión podrán solicitar al Registrador mercantil del domicilio de cualquiera de ellas el nombramiento de uno o varios expertos para la elaboración de un único informe.

3. El informe o informes de los expertos no serán necesarios cuando así lo acuerden la totalidad de los socios con derecho de voto y, en su caso, de quienes de acuerdo con la ley o los estatutos pudieran ejercer legítimamente el derecho de voto, de cada una de las sociedades que participan en la escisión, sin perjuicio de su necesidad en cuanto a la valoración del patrimonio aportado en relación al capital de las sociedades beneficiarias.

Artículo 73. Modificaciones patrimoniales posteriores al proyecto de escisión

Los administradores de la sociedad escindida están obligados a informar a su junta de socios sobre cualquier modificación importante del patrimonio acaecida entre la fecha de elaboración del proyecto de escisión y la fecha de reunión de la junta. La misma información deberán proporcionar, en los casos de escisión por absorción, los administradores de las sociedades beneficiarias y éstos a los administradores de la sociedad escindida, para que, a su vez, informen a su junta de socios.

Artículo 74. Protección de los acreedores y responsabilidad por las obligaciones incumplidas

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas comunes sobre protección de acreedores, de las obligaciones asumidas frente a los acreedores de la sociedad escindida o segregada por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas, responderán solidariamente todas las sociedades beneficiarias hasta el importe de los activos netos atribuidos a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad escindida, hasta el importe de los activos netos que permanezcan en ella.

Artículo 75. Simplificación de requisitos

1. En el caso de escisión por constitución de nuevas sociedades, si las acciones, participaciones o, en su caso, cuotas de cada una de las nuevas sociedades se atribuyen a los socios de la sociedad que se escinde proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de ésta, no serán necesarios el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión ni el informe de expertos independientes, así como tampoco el balance de escisión.

2. Cuando la escisión se lleve a cabo como escisión por segregación con creación de nuevas sociedades, en el proyecto no se incluirá:

1º El tipo de canje de las acciones o participaciones.

2º Las modalidades de entrega de las acciones o participaciones de las sociedades beneficiarias.

3º La fecha de participación en las ganancias sociales de las sociedades beneficiarias.

4º La atribución a los socios de la sociedad segregada de acciones, participaciones o, en su caso, cuotas de las sociedades beneficiarias.

5º Los derechos conferidos por las sociedades beneficiarias a los socios de la sociedad segregada que disfruten de derechos especiales.

3. Tampoco será necesario para la realización de la segregación con creación de nuevas sociedades:

1º El informe de los administradores.

2º El informe de experto independiente, salvo en lo referente a si el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen es igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del aumento del capital de la sociedad beneficiaria.

CAPITULO IV

De la cesión global de activo y pasivo

Sección 1ª. Disposiciones generales

Artículo 76. Cesión global de activo y pasivo

1. Una sociedad inscrita podrá transmitir en bloque todo su patrimonio por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas de socio del cesionario.

2. La sociedad cedente quedará extinguida si la contraprestación fuese recibida total y directamente por los socios. En todo caso, la contraprestación que reciba cada socio deberá respetar las normas aplicables a la cuota de liquidación.

Artículo 77. Cesión global plural

Cuando la cesión global se realice a dos o más cesionarios, cada parte del patrimonio que se ceda habrá de constituir una unidad económica.

Sección 2ª. Régimen legal de la cesión global

Artículo 78. Proyecto de cesión global

1. Los administradores de la sociedad habrán de redactar y suscribir un proyecto de cesión global, que contendrá, además de las informaciones previstas en las disposiciones comunes, las siguientes menciones:

1º Los datos de identificación del cesionario o cesionarios.

2º La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables.

3º La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a cada cesionario.

4º La contraprestación que hayan de recibir la sociedad o los socios. Cuando la contraprestación se atribuya a los socios, se especificará el criterio en que se funde el reparto.

2. Los administradores deberán presentar para su depósito en el Registro Mercantil un ejemplar del proyecto de cesión global.

Artículo 79. Informe de los administradores

Los administradores elaborarán un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto de cesión global.

Artículo 80. Informe de experto independiente

El informe de experto independiente en la cesión global tendrá carácter facultativo.

Artículo 81. Acuerdo de cesión global

1. La cesión global habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de la sociedad cedente, ajustándose estrictamente al proyecto de cesión global, con los requisitos establecidos para la adopción del acuerdo de fusión.
2. El acuerdo de cesión global se publicará en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un diario de gran circulación en la provincia del domicilio social, con expresión de la identidad del cesionario o cesionarios. En el anuncio se hará constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado.
3. No será necesaria la publicación del acuerdo de cesión global cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios y acreedores, por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad. Asimismo, deberá ponerse a disposición de los representantes de los trabajadores el proyecto de cesión global y el informe de los administradores.

Artículo 82. Escritura e inscripción de la cesión global

1. La cesión global se hará constar en escritura pública otorgada por la sociedad cedente y por el cesionario o cesionarios. La escritura recogerá el acuerdo de cesión global adoptado por la sociedad cedente.
2. La eficacia de la cesión global se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad cedente. Si la sociedad se extinguiera como consecuencia de la cesión, se cancelarán sus asientos registrales.

Artículo 83. Responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas comunes sobre protección de acreedores, de las obligaciones asumidas por un cesionario que resulten incumplidas responderán solidariamente los demás cesionarios, hasta el límite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesión; y, según los casos, los socios hasta el límite de lo que hubieran recibido como contraprestación por la cesión, o la propia sociedad que no se hubiera extinguido, hasta el importe de los activos netos que permanezcan en ella.
2. La responsabilidad solidaria de los cesionarios y los socios prescribirá a los cinco años.

TÍTULO III DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES TRANSFRONTERIZAS INTRAEUROPEAS

CAPÍTULO I Ámbito de aplicación

Artículo 84. Modificaciones estructurales incluidas

1. El presente título se aplicará a las siguientes modificaciones estructurales:

1º Las transformaciones de sociedades de capital, constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de dicho Espacio, en sociedades de capital sujetas al Derecho español y las transformaciones de estas últimas en sociedades de capital sujetas al Derecho de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

2º Las fusiones, escisiones y cesiones globales de activo y pasivo de sociedades de capital constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de dicho Espacio cuando, interviniendo al menos dos de ellas sujetas a la legislación de Estados miembros diferentes, una de ellas esté sujeta a la legislación española.

2. Las sociedades de capital sujetas a la legislación española a las que se aplica el presente Título son las sociedades anónimas, comanditarias por acciones y de responsabilidad limitada.

3. Salvo que el presente Título disponga lo contrario, las sociedades españolas que participen en una modificación transfronteriza cumplirán con los requisitos y trámites previstos para las modificaciones estructurales internas y lo previsto en las disposiciones que siguen.

Artículo 85. Exclusiones

El presente Título no se aplicará a las modificaciones estructurales en las que participen una o varias sociedades cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público, que funcione según el principio de reparto de riesgos.

Artículo 86. Ley aplicable

1. En las fusiones, escisiones y cesiones globales se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales de las sociedades participantes y en las transformaciones, la ley personal anterior y posterior de la sociedad que se transforma, todo ello sin perjuicio del régimen aplicable a las sociedades anónimas europeas.

2. En lo sucesivo se entenderá por “Estado miembro de origen” el Estado a cuya ley está sujeta la sociedad participante antes de la transformación, fusión, escisión o cesión global y por “Estado miembro de destino” el Estado a cuya ley queda sometida la sociedad resultante de la transformación o de la fusión, o la sociedad o sociedades beneficiarias en el caso de escisión o cesión global.

CAPÍTULO II

Disposiciones generales

Sección 1ª. Del proyecto y protección de socios, acreedores y trabajadores

Artículo 87. Proyecto de modificación estructural

Los administradores de la sociedad o sociedades españolas que realicen o participen en una modificación estructural deberán elaborar un proyecto que contendrá, al menos, las mismas menciones que para las modificaciones estructurales internas que corresponda y, en su caso, la información sobre los procedimientos por los que se determinan los regímenes de participación de los trabajadores en la definición de sus derechos a la participación en la sociedad o sociedades resultantes.

Artículo 88. Informe del órgano de administración

En la sección del informe del órgano de administración destinada a los trabajadores se explicará, en particular, lo siguiente:

- 1º Las consecuencias de la operación para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservar dichas relaciones;
- 2º Cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables o en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad;
- 3º El modo en que los factores contemplados en los apartados 1 y 2 afectan a las filiales de la sociedad.

Artículo 89. Protección de los socios

Los socios de las sociedades españolas participantes en una modificación estructural que, como consecuencia de esa modificación, vayan a quedar sometidos a una ley extranjera, tendrán derecho a enajenar sus acciones o participaciones a la sociedad a la que pertenezcan o a los socios o terceros que esta proponga a cambio de una compensación en efectivo adecuada, siempre que hayan votado en contra de la aprobación del correspondiente proyecto. Este mismo derecho corresponde a los titulares de acciones o participaciones sin voto.

Artículo 90. Protección de los acreedores

1. Si al tiempo de emitirse el certificado previo por el Registrador Mercantil algún acreedor de cualquier sociedad española participante en una modificación estructural transfronteriza hubiera manifestado su disconformidad con las garantías y, en su caso, hubiera presentado demanda judicial, se dejará constancia de ello en el certificado previo.
2. Los derechos de los acreedores se entenderán sin perjuicio de la aplicación del régimen propio de las obligaciones pecuniarias o no pecuniarias debidas a organismos públicos.

Artículo 91. Información, consulta y participación de los trabajadores

1. Cuando la sociedad o sociedades resultantes de la modificación estructural tengan su domicilio social en España, los derechos de implicación de los trabajadores se definirán con arreglo a la legislación laboral española. En particular, los derechos de participación de los trabajadores en la sociedad o sociedades se definirán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
2. Cuando al menos una de las sociedades que participan en la modificación estructural esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores y la sociedad o sociedades resultantes de la modificación estructural se rijan por dicho sistema, dicha sociedad o sociedades deberán adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.
3. A efectos de esta Ley, los conceptos de implicación y de participación de los trabajadores serán los establecidos en la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
4. Los derechos de información y consulta de los trabajadores de la sociedad o sociedades resultantes de la modificación estructural que presten sus servicios en centros de trabajo situados en España, se regirán por la legislación laboral española, al margen del lugar donde dicha sociedad o sociedades tengan su domicilio social.

Artículo 92. Publicidad preparatoria y complementaria

1. La publicidad preparatoria del acuerdo de modificación estructural transfronteriza se hará de conformidad con las disposiciones aplicables a las modificaciones internas, si bien la sociedad o

sociedades participantes deberán, en todo caso, presentar en el registro correspondiente, la información que se señala a continuación.

2. La sociedad que se transforma, escinde, participa como cedente en una cesión global o cada una de las sociedades participantes en una fusión presentarán en sus respectivos registros, al menos un mes antes de la fecha de la junta general que deba aprobar el proyecto de modificación estructural, la siguiente información:

1° Forma jurídica, la razón social y el domicilio social de:

a) la sociedad que se transforma en su Estado de origen, así como la forma, razón y domicilio propuestos para la sociedad transformada en el Estado miembro de destino;

b) cada una de las sociedades que se fusionan, así como la forma, razón y domicilio propuestos para cualquier sociedad de nueva creación;

c) la sociedad escindida, así como la forma, razón y domicilio propuestos para la nueva sociedad o sociedades resultantes o beneficiarias de la escisión;

d) la sociedad cedente, así como la forma, razón y domicilio de la sociedad o sociedades cesionarias.

2° El registro de la sociedad que se transforma, escinde, participa como cedente o de cada una de las sociedades que participan en la fusión, así como su número de inscripción en ese registro.

3° Una indicación de las medidas tomadas para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios.

4° Los detalles del sitio web en el que podrá obtenerse en línea y gratuitamente el proyecto de modificación estructural, la publicidad preparatoria del acuerdo, así como información completa sobre las medidas a que se refiere el inciso 3° del presente apartado.

2. El registro del Estado miembro de origen, en los casos de transformación, escisión, cesión global y de cada una de las sociedades participantes en los casos de fusión, pondrá a disposición del público la información mencionada en el párrafo primero, incisos 1° a 4°.

Sección 2ª. De la impugnación, formalización e inscripción de las modificaciones estructurales

Artículo 93. Impugnación del acuerdo

No constituirán por sí solos, individual o conjuntamente, motivos de impugnación del acuerdo de modificación estructural, los siguientes:

1° La fijación de forma inadecuada de la compensación en efectivo ofrecida en el proyecto por la enajenación de las acciones o participaciones de los socios; o

2° El incumplimiento de los requisitos legales en la información facilitada sobre dicha compensación en efectivo.

Artículo 94. Certificado previo a la modificación estructural

1. Corresponde al Registrador mercantil del domicilio social de la sociedad española que va a realizar o participar en una operación en la que España sea el Estado de origen, controlar la legalidad

de la operación en lo que atañe a las partes del procedimiento que estén sujetas al Derecho español y expedir un certificado previo que acredite que se han cumplido todas las condiciones exigidas y que se han cumplimentado correctamente todos los procedimientos y formalidades necesarias.

2. La solicitud por parte de la sociedad para obtener el certificado previo se acompañará de la escritura de elevación a público del acuerdo de modificación estructural adoptado por la junta general, a la que se unirá la siguiente documentación:

- 1º El proyecto de modificación estructural.
- 2º El informe del órgano de administración, en su caso, y la opinión de los representantes de los trabajadores si se hubiera recibido.
- 3º El informe de experto independiente.
- 4º Las observaciones presentadas, en su caso, por socios, acreedores o representantes de los trabajadores.
- 5º La declaración sobre la situación financiera de la sociedad, cuando se hubiera emitido.
- 6º La aprobación, en su caso, del socio o socios afectados por un aumento de sus obligaciones económicas.

3. Además, la solicitud deberá contener información sobre los siguientes extremos:

- 1º El número de trabajadores de la sociedad en el momento de la elaboración del proyecto de la operación.
- 2º La existencia de filiales y su respectiva ubicación geográfica.
- 3º El cumplimiento de las obligaciones pecuniarias o no pecuniarias debidas por la sociedad a organismos públicos.
- 4º El inicio, en su caso, de los procedimientos relativos a la determinación de los derechos de participación de los trabajadores.

4. La solicitud de la sociedad y la escritura de elevación a público del acuerdo de modificación estructural adoptado por la junta general podrán presentarse electrónicamente en el Registro Mercantil del domicilio social de la sociedad. El Registrador efectuará el control de legalidad y se pronunciará sobre el certificado previo en el plazo de tres meses.

5. Si la modificación proyectada cumple todas las condiciones exigidas y se han observado todos los procedimientos y formalidades necesarias, el Registrador Mercantil expedirá el certificado y lo notificará a la sociedad, haciéndolo constar en la hoja de ésta. En caso contrario, el Registrador no expedirá el certificado previo, informará a la sociedad de los motivos de su decisión y le ofrecerá la oportunidad de subsanar los defectos observados en un plazo no superior a 30 días. De no producirse la subsanación en dicho plazo, el Registrador denegará el certificado previo.

Artículo 95. Control de legalidad en caso de sospecha de abuso o fraude

1. Excepcionalmente, el plazo inicial de tres meses se ampliará por un máximo de tres meses más si a resultas de la documentación e información presentadas el Registrador Mercantil tuviera sospechas fundadas de que la operación sometida se realiza con fines abusivos o fraudulentos, que tengan por objeto o produzcan el efecto de eludir el Derecho de la Unión o el Derecho español, o sirva a fines delictivos.
2. El Registrador podrá, en función del motivo de su sospecha:
 - 1º Requerir a la sociedad información adicional que considere necesaria, que podrá incluir, entre otras cuestiones, la finalidad de la operación, el sector, la inversión, la facturación neta y las pérdidas y ganancias, la composición del balance, el lugar donde quedarán situados las actividades económicas de la sociedad, el centro de administración efectiva, la residencia fiscal, el lugar de trabajo de sus empleados, los activos y su ubicación, o los titulares reales de la sociedad.
 - 2º Solicitar al organismo o entidad pública que corresponda la información adicional que considere necesaria, en particular sobre el estado de cumplimiento por la sociedad de sus obligaciones en el área de competencia de dicho organismo o entidad. A estos efectos, el Registrador estará autorizado para recabar, en tiempo útil, dicha información de las autoridades del ámbito tributario, económico, social o penal. También podrá solicitar información, en su caso, a las autoridades competentes del Estado de destino, cuyo Derecho registrará la sociedad resultante de la operación.
3. El Registrador Mercantil llevará a cabo una valoración global de la información y documentación que haya recibido conforme a los procedimientos previstos en esta sección. A estos efectos el Registrador Mercantil podrá acudir a un experto independiente, cuyo coste correrá a cargo de la sociedad solicitante.
4. Cuando, debido a la complejidad de la operación, no sea posible realizar la valoración en los plazos establecidos en los apartados anteriores, el Registrador Mercantil notificará a la sociedad los motivos de cualquier retraso antes del vencimiento de dichos plazos.
5. Si de esa valoración global resultara de manera clara que la operación se lleva a cabo con fines abusivos o fraudulentos o con intención delictiva, el Registrador Mercantil denegará el certificado previo e informará a la sociedad de los motivos de su decisión. En otro caso, expedirá el certificado y lo notificará a la sociedad.

Artículo 96. Recursos y vigencia del certificado previo

1. La denegación por el Registrador Mercantil del certificado previo agotará la vía administrativa y podrá ser recurrida por la sociedad ante el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social en el plazo máximo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio verbal.
2. El plazo de vigencia del certificado previo será de seis meses, prorrogable por causa justificada a juicio del Registrador Mercantil por seis meses más.

Artículo 97. Transmisión del certificado previo

1. El certificado previo se compartirá con la autoridad que el Estado miembro de destino haya designado como competente para el control de legalidad de la operación, a través del sistema de interconexión de registros. El acceso al certificado será gratuito para dicha autoridad, así como para los registros.
2. En todo caso, el certificado previo estará disponible al público a través del sistema de interconexión de registros.

Artículo 98. Control de la legalidad de la operación cuando España sea el Estado de destino

1. Cuando la sociedad resultante de la operación quede sujeta al Derecho español, el Registrador Mercantil controlará, antes de proceder a su inscripción, la legalidad de la operación en lo relativo a la realización de la modificación estructural y a la constitución de la nueva sociedad o sociedades o de las modificaciones de la sociedad absorbente.
2. También verificará que las disposiciones sobre la participación de los trabajadores se hayan establecido de conformidad con lo previsto en esta Ley.
3. A estos efectos, la sociedad que se transforma, cada una de las sociedades que se fusionan o la sociedad que se escinde deberá presentar:
 - 1º El certificado previo.
 - 2º El proyecto de modificación estructural aprobado por la junta general, salvo que su acuerdo no fuera exigible.
 - 3º Información, en su caso, sobre las medidas adoptadas en relación con la participación de los trabajadores.
4. La solicitud, información y documentación previstas en este artículo podrán presentarse por la sociedad que se transforma, fusiona o escinde electrónicamente, sin necesidad de comparecencia física ante el Registrador Mercantil.
5. El Registrador Mercantil procederá a la inscripción de la operación de modificación estructural una vez que compruebe que se han cumplido debidamente todas las condiciones exigidas y se han cumplimentado correctamente los trámites necesarios.
6. El Registrador Mercantil aceptará el certificado previo como prueba concluyente de la correcta cumplimentación de los procedimientos y formalidades exigidas en el Estado miembro de origen.

Artículo 99. Registro e inscripción de la operación

1. Si España fuera el Estado de destino de la operación, se hará constar en el Registro Mercantil, en la hoja abierta a la sociedad española resultante, la fecha de su inscripción y el hecho de que esta inscripción resulta de una transformación, fusión o escisión. También se hará constar en esa hoja el número de registro o inscripción, la razón social y la forma jurídica que tenían la sociedad o sociedades participantes en su Estado de origen antes de la operación.

2. El Registrador notificará al registro del Estado o Estados miembros de origen, a través del sistema de interconexión de registros, que la operación de transformación, fusión o escisión ha surtido efecto.
3. Si España fuera el Estado o uno de los Estados de origen de la operación, se hará constar en el Registro Mercantil, en la hoja abierta a la sociedad española que participa en esa operación, la fecha de cancelación o modificación de sus asientos registrales y el hecho de que esta cancelación o modificación es resultado de una transformación, fusión o escisión. También se hará constar en esa hoja el número de registro o inscripción, la razón social y la forma jurídica que tenga la sociedad resultante de la operación en su Estado de destino.
4. Procederá la cancelación de los asientos registrales de la sociedad española:
 - 1º En el caso de transformación o fusión, inmediatamente después de la recepción de la notificación por el registro del Estado miembro de destino o de la sociedad resultante de la fusión, de que la transformación o la fusión han surtido efecto; o
 - 2º en el caso de escisión total, inmediatamente después de la recepción de la notificación de que se ha registrado la sociedad o sociedades beneficiarias en el o los Registros de sus respectivos Estados miembros.
5. El Registro Mercantil pondrá a disposición del público y hará accesible la información a que se refieren los apartados anteriores a través del sistema de interconexión de registros.

CAPÍTULO III **Disposiciones especiales**

Sección 1ª. De las transformaciones transfronterizas

Artículo 100. Concepto

1. En virtud de una transformación transfronteriza:
 - 1º Una sociedad de capital española, sin ser disuelta ni liquidada y conservando su personalidad jurídica, se convierte en una sociedad de capital del Estado miembro de destino, trasladando al menos su domicilio social a dicho Estado.
 - 2º Una sociedad de capital inscrita en otro Estado miembro de origen, sin ser disuelta ni liquidada y, conservando su personalidad jurídica, se convierte en una sociedad de capital española, trasladando al menos su domicilio social a España.
2. A los efectos de esta sección se entenderá:
 - 1º Por Estado miembro de origen, el Estado miembro en el que la sociedad estuviera inscrita con anterioridad a la transformación.
 - 2º Por Estado miembro de destino, el Estado miembro en el que se inscriba la sociedad transformada como resultado de la transformación.
 - 3º Por sociedad transformada, la sociedad constituida en el Estado miembro de destino como resultado de la transformación.

Artículo 101. Ley aplicable y formalidades

Los procedimientos y formalidades que deban cumplirse en relación con la transformación con el fin de obtener el certificado previo a la transformación se registrarán por el Derecho del Estado miembro de origen, mientras que los procedimientos y formalidades que deban cumplirse tras la recepción de dicho certificado para concluir la operación se registrarán por el Derecho del Estado miembro de destino.

Artículo 102. Proyecto de transformación

El proyecto contendrá, además de las menciones enumeradas en las disposiciones comunes, las siguientes:

- 1º La forma jurídica, razón social y domicilio social propuestos para la sociedad transformada en el Estado de destino.
- 2º La escritura de constitución de la sociedad en el Estado de destino, en su caso, y los estatutos sociales si fueran objeto de un acto separado.
- 3º Cualquier tipo de incentivo o subvención recibido, en su caso, por la sociedad en España en los últimos cinco años.

Artículo 103. Protección de los acreedores en las transformaciones

1. Durante los dos años posteriores a que la transformación haya surtido efecto, los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación podrán continuar demandando a la sociedad ante los tribunales del domicilio social que ésta mantenía en el Estado de origen.
2. La disposición anterior se añade a las reglas vigentes sobre competencia judicial de la Unión Europea y del Derecho español. Los acuerdos que atribuyan competencia judicial exclusiva y los convenios arbitrales prevalecerán en los términos previstos en sus respectivas regulaciones.

Artículo 104. Fecha y efectos de la transformación

1. La transformación tendrá efectos a partir de la inscripción de la operación en el Registro mercantil correspondiente cuando sea España el Estado de destino de la sociedad transformada. En el caso de que el Estado miembro de destino sea otro se estará a lo dispuesto en su legislación.
2. Como consecuencia de la transformación:
 - 1º La totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad que se transforma, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, pasará a serlo de la sociedad transformada.
 - 2º Los socios de la sociedad seguirán siendo socios de la sociedad transformada, a menos que hayan enajenado sus acciones o participaciones en ejercicio del correspondiente derecho de enajenación previsto por la realización de la operación.
 - 3º Los derechos y obligaciones de la sociedad que se transforma derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en la que surta efecto la transformación quedarán atribuidos a la sociedad transformada.

Sección 2º. De las fusiones

Artículo 105. Condiciones relativas a las fusiones

1. Las sociedades participantes en una fusión cumplirán con las disposiciones y trámites de la legislación nacional a la que estén sujetas, incluyendo los relativos al proceso de toma de decisiones sobre la fusión y la protección de los trabajadores en lo que respecta a sus derechos distintos de los de participación.
2. El hecho de que la legislación de, al menos, uno de los Estados afectados permita que la compensación en efectivo, que forma parte del tipo de canje, supere el diez por ciento del valor nominal o, en su defecto, del valor contable de las acciones o participaciones que se canjeen, no será obstáculo para la realización de una fusión.
3. Las normas que permiten al Gobierno español imponer condiciones por razones de interés público a una fusión interna serán también de aplicación a las fusiones en las que, al menos, una de las sociedades que se fusionan esté sujeta a la ley española.

Artículo 106. Proyecto común de fusión

Las sociedades que se fusionen redactarán un proyecto común de fusión transfronteriza. El proyecto contendrá las menciones enumeradas para las fusiones internas, así como las previstas en las disposiciones generales del Capítulo II de este Título.

Artículo 107. Informe del órgano de administración

El informe de los administradores sobre la fusión explicará, de manera especial, los derechos e instrumentos de protección de los socios relativos a la enajenación de sus acciones o participaciones y a la relación de canje.

Artículo 108. Informe de experto independiente

1. El experto estará facultado para obtener de las sociedades que participen en la fusión transfronteriza toda la información necesaria para cumplir con su labor pericial.
2. Como alternativa a la designación de expertos que operen por cuenta de cada una de las sociedades que se fusionen, uno o más expertos independientes, previa petición conjunta de dichas sociedades, podrán ser designados o autorizados por la correspondiente autoridad judicial o administrativa del Estado miembro del que dependa alguna de las sociedades que se fusionen o la sociedad resultante, para redactar un informe escrito único destinado a la totalidad de los socios.

Artículo 109. Protección de los socios en la relación de canje

1. Los socios de las sociedades españolas que se fusionen que no tengan o no hayan ejercitado el derecho a enajenar sus acciones o participaciones, pero consideren que la relación de canje establecida en el proyecto no es adecuada, pueden impugnarla y reclamar un pago en efectivo.
2. Este derecho se ejercerá conforme al procedimiento y con los efectos previstos para la protección de socios respecto de la relación de canje en las fusiones internas.

Artículo 110. Protección de acreedores

Los acreedores de las sociedades que participen en la fusión gozarán de la protección aplicable a las fusiones internas.

Artículo 111. Fusiones especiales

Serán aplicables las reglas sobre las fusiones especiales internas con las siguientes especialidades:

1. El proyecto común de fusión deberá contener información sobre la valoración del activo y pasivo transferido a la sociedad resultante de la transformación transfronteriza y las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión transfronteriza.
2. Cuando la sociedad absorbente española fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de la totalidad del capital de la sociedad o sociedades absorbidas, no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión ni la celebración de la junta general, salvo que lo exijan socios que representen al menos el 1% del capital social. La misma regla será aplicable cuando la sociedad o alguna de las sociedades absorbidas sea española.

Artículo 112. Fecha y efectos de la fusión

1. Cuando la sociedad resultante de la fusión sea española la operación surtirá efectos a partir de la inscripción en el Registro mercantil. En otro caso se estará a lo dispuesto en la legislación del Estado de la sociedad resultante.
2. Si además de la sociedad resultante de la fusión también fuera española alguna de las sociedades que se extinguen, la legalidad del procedimiento de fusión en relación con la misma se realizará por el Registrador mercantil del domicilio de la sociedad resultante de la fusión, siendo suficiente que en el título presentado al Registro conste, debidamente acreditada por el Registrador del domicilio de la sociedad que se extingue, la inexistencia de obstáculos registrales para la fusión pretendida.
3. La fusión producirá los siguientes efectos:
 - 1º La transmisión a la sociedad resultante de la totalidad del patrimonio de la sociedad o sociedades que se extinguen, incluidos los contratos, créditos, derechos y obligaciones.
 - 2º Los socios de la sociedad o sociedades que se extinguen devendrán socios de la sociedad resultante.
 - 3º La extinción de la sociedad o sociedades absorbidas o fusionadas.
4. Cuando la legislación de los Estados miembros imponga trámites especiales para que la transmisión de determinados bienes, derechos y obligaciones sea oponible a terceros, dichos trámites se aplicarán y serán cumplidos por la sociedad resultante de la fusión.

Sección 3ª. De las escisiones con creación de nuevas sociedades

Artículo 113. Ley aplicable y formalidades

1. Los procedimientos y formalidades que deban cumplirse en relación con la escisión para la obtención del certificado previo se registrarán por el Derecho del Estado miembro de la sociedad escindida.
2. Los procedimientos y formalidades que deban cumplirse tras la recepción de dicho certificado para la conclusión de la operación se registrarán por el Derecho de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias.

Artículo 114. Proyecto de escisión

La sociedad escindida redactará un proyecto de escisión transfronteriza. El proyecto contendrá las menciones enumeradas para las escisiones internas en favor de sociedades de nueva creación, así como las previstas en las disposiciones generales del Capítulo II de este Título.

Artículo 115. Informe de administradores y experto independiente

El informe de los administradores de la sociedad escindida española sobre la escisión y el informe de experto independiente se elaborarán conforme a lo previsto para las escisiones internas.

Artículo 116. Protección de los socios en la relación de canje

1. Los socios de la sociedad española escindida que no tengan o no hubieran ejercitado el derecho a enajenar sus acciones o participaciones, pero consideren que la relación de canje establecida en el proyecto no es adecuada, pueden impugnarla y reclamar un pago en efectivo.

2. Este derecho se ejercerá conforme al procedimiento y con los efectos previstos para la protección de socios respecto de la relación de canje en las escisiones internas.

Artículo 117. Protección de los acreedores en las escisiones

Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión gozarán de la protección aplicable a las escisiones internas.

Artículo 118. Simplificación de formalidades en la segregación

Cuando la escisión se lleve a cabo como escisión por segregación, en el proyecto no se incluirá:

1º Los detalles de la oferta de compensación en efectivo de los socios.

2º La oferta a los socios de la sociedad segregada del derecho a enajenar sus acciones o participaciones ni a impugnar la relación de canje.

Artículo 119. Fecha y efectos de la escisión

1. Cuando la sociedad escindida sea española, la operación surtirá efecto con la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil correspondiente a esta sociedad, lo que no podrá tener lugar antes de que el registro del Estado miembro de la sociedad beneficiaria notifique al Registro de la sociedad escindida, mediante el sistema de interconexión de registros, que la sociedad beneficiaria ha sido ya inscrita. La misma regla se aplicará cuando haya más de una sociedad beneficiaria. Una vez registrada la escisión, el Registro Mercantil de la sociedad escindida lo notificará por el mismo sistema al registro o registros de las sociedades beneficiarias. Si la sociedad escindida se extinguiera como consecuencia de la escisión, se cancelarán sus asientos registrales.

2. Cuando la sociedad escindida no sea española, la operación surtirá efecto conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado de la sociedad escindida.

3. La escisión total producirá los siguientes efectos:

1º La transmisión a las sociedades beneficiarias conforme al reparto especificado en el proyecto de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones.

2° La conversión de los socios de la sociedad escindida en socios de las sociedades beneficiarias conforme al reparto de acciones o participaciones especificado en el proyecto, a menos que hayan enajenado sus acciones o participaciones.

3° La transmisión a las respectivas sociedades beneficiarias de los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales y existentes en la fecha en que surta efecto la escisión.

4° La extinción de la sociedad escindida.

4. La escisión parcial producirá los siguientes efectos:

1° La transmisión a la sociedad o sociedades beneficiarias de una parte del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, permaneciendo la parte restante en la sociedad escindida conforme al reparto especificado en el proyecto.

2° La conversión de al menos algunos de los socios de la sociedad escindida en socios de la sociedad o sociedades beneficiarias, permaneciendo al menos algunos de ellos en la sociedad escindida o la conversión en socios de ambas conforme al reparto de acciones o participaciones especificado en el proyecto, salvo que dichos socios hayan enajenado sus acciones o participaciones.

3° La transmisión a las sociedades beneficiarias respectivas de los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales y existentes en la fecha en que surta efecto la escisión, atribuidos a la sociedad o sociedades beneficiarias de conformidad con el proyecto.

5. La escisión por segregación producirá los siguientes efectos:

1° La transmisión a la sociedad o sociedades beneficiarias de parte del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, permaneciendo la parte restante en la sociedad escindida conforme al reparto especificado en el proyecto.

2° La atribución a la sociedad escindida de las acciones o participaciones de la sociedad o sociedades beneficiarias.

3° La transmisión a la sociedad o sociedades beneficiarias de los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales y existentes en la fecha en que surta efecto la escisión, atribuidos a la sociedad o sociedades beneficiarias de conformidad con el proyecto.

6. Cuando la legislación de los Estados miembros imponga en el caso de escisión, trámites especiales para que la transmisión de determinados bienes, derechos y obligaciones de la sociedad escindida sea oponible a terceros, dichos trámites se aplicarán y serán cumplidos por las sociedades escindida o beneficiaria según corresponda.

Sección 4ª. De las escisiones con sociedades existentes

Artículo 120. Escisión con sociedades beneficiarias ya existentes: regla general

1. Las escisiones, cuando las sociedades beneficiarias fueran sociedades ya existentes, se registrarán por las normas de la escisión con sociedades de nueva creación, con las siguientes especialidades:

1º Se elaborará un proyecto común de escisión, que deberá ser aprobado por todas las sociedades participantes en la operación de escisión.

2º Cuando la sociedad beneficiaria sea española, también se requerirá informe de sus administradores e informe pericial independiente.

3º Las reglas sobre protección de socios en la relación de canje y protección de acreedores serán también aplicables a los socios y acreedores de la sociedad beneficiaria española.

4º No son aplicables las reglas sobre simplificación de requisitos en la segregación.

2. La responsabilidad legal de todas las sociedades participantes frente a los acreedores de la sociedad escindida al tiempo de la escisión se regirá por la ley personal de esta sociedad.

Artículo 121. Control de legalidad cuando España sea el Estado de destino

1. El Registrador Mercantil controlará en especial que las sociedades que participan en la escisión hayan aprobado el proyecto común de escisión en los mismos términos.

2. En cuanto a la documentación que debe presentarse al Registro Mercantil de la sociedad beneficiaria española el certificado previo se podrá sustituir, cuando su emisión no esté contemplada en el Estado miembro de la sociedad escindida para operaciones con sociedades beneficiarias existentes, por un certificado que acredite la legalidad de la operación y que se han cumplimentado todos los procedimientos y formalidades exigidas para la escisión en ese Estado.

Sección 5ª. De las cesiones globales de activo y pasivo

Artículo 122. Concepto

1. Se entenderá por cesión global de activo y pasivo la operación por la que la sociedad cedente, transmite en bloque todo su patrimonio por sucesión universal a una o varias sociedades cesionarias, a cambio de una contraprestación en dinero u otros activos distintos de las acciones o participaciones de la cesionaria o cesionarias.

2. Si la cesión global se hiciera a una cesionaria persona física, se estará a lo dispuesto en su ley personal, aplicándose las reglas que siguen en lo que corresponda.

Artículo 123. Ley aplicable

1. La cesión global de activo y pasivo solo será posible cuando esta operación esté admitida por las leyes personales de la sociedad cedente y de la sociedad o sociedades cesionarias.

2. La ley de la sociedad cedente regirá la cesión global en lo que respecta a su aprobación por esta sociedad, a los derechos de sus socios, acreedores y trabajadores, y a la transmisión por sucesión universal de la totalidad de su activo y pasivo. La ley de la sociedad cesionaria regirá la cesión global en lo que respecta a su aprobación por esta sociedad, a los trámites y requisitos para concluir la operación.

3. La responsabilidad legal de todas las sociedades participantes frente a los acreedores de la sociedad cedente se regirá por la ley personal de esta sociedad.

Artículo 124. Proyecto de cesión global

Las sociedades participantes elaborarán un proyecto común de cesión global transfronteriza, que deberá ser aprobada por cada una de ellas, y que contendrá las menciones requeridas en la cesión global interna y, en su caso, la información sobre el régimen de participación de los trabajadores en la sociedad o sociedades cesionarias.

Artículo 125. Informe de administradores y experto independiente

El informe de los administradores de la sociedad cedente o cesionaria española sobre la cesión global y, en su caso, el informe de experto independiente, se ajustarán a las especialidades de esta operación

Artículo 126. Protección de los socios

No serán aplicables a las cesiones globales de activo y pasivo de sociedades españolas las disposiciones generales sobre protección de los socios mediante el derecho de enajenación de sus acciones o participaciones.

Artículo 127. Protección de los acreedores

Los acreedores de las sociedades que participen en la cesión global gozarán de la protección aplicable a las cesiones globales internas.

Artículo 128. Certificado previo y control de legalidad

Si la sociedad cedente es española, será necesaria la obtención de un certificado previo del Registro Mercantil en los términos previstos para las escisiones, que se ajustará a las especialidades indicadas en esta sección.

Artículo 129. Fecha y efectos de la cesión global

1. Cuando la sociedad cedente sea española, la operación surtirá efecto con la inscripción de la cesión en el Registro Mercantil correspondiente a esta sociedad. Una vez inscrita la cesión, el Registro Mercantil de la sociedad cedente lo notificará al registro o registros de las sociedades cesionarias. Si la sociedad cedente se extinguiera como consecuencia de la cesión, se cancelarán sus asientos registrales.
2. Cuando la sociedad cedente no sea española, la operación surtirá efecto conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado de dicha sociedad.
3. La cesión global de activo y pasivo producirá los siguientes efectos:
 - 1º La transmisión al cesionario o a los cesionarios de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad cedente, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones.
 - 2º La transmisión al cesionario o a los cesionarios de los derechos y obligaciones de la sociedad cedente derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en que surta efecto la cesión global.
 - 3º La extinción de la sociedad cedente española, si la contraprestación fuese recibida total y directamente por los socios.
4. Cuando la legislación de los Estados miembros imponga, en el caso de cesión global de activo y pasivo, trámites especiales para que la transmisión de determinados bienes, derechos y obligaciones

de la cedente sea oponible a terceros, dichos trámites se aplicarán y serán cumplidas por la sociedad cedente o cesionaria según proceda.

TÍTULO IV DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES TRANSFRONTERIZAS EXTRAEUROPEAS

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Sección Única. Ámbito de aplicación y disposiciones comunes

Artículo 130. Modificaciones estructurales incluidas

El presente título se aplicará a las siguientes modificaciones estructurales:

1º Las transformaciones de sociedades de capital constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado que no forme parte del Espacio Económico Europeo en sociedades de capital sujetas al Derecho español o en sentido inverso.

2º Las fusiones, escisiones y cesiones globales de activo y pasivo en que intervengan sociedades de capital constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado que no forme parte del Espacio Económico Europeo, y una o varias sociedades sujetas a la legislación española.

Artículo 131. Régimen general

1. A las sociedades españolas que participen en modificaciones estructurales con sociedades constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado que no forme parte del Espacio Económico Europeo les serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a las modificaciones estructurales intraeuropeas, sustituyendo la expresión “Estado miembro” por “Estado”, con las excepciones y reglas especiales que se prevén en este Título.

2. En las modificaciones estructurales extraeuropeas en las que España sea el Estado de origen, será siempre necesario el informe de experto independiente previsto en las disposiciones comunes.

Artículo 132. Certificado previo a la transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo

Será exigible a las sociedades españolas que participen en una modificación estructural extraeuropea la obtención del certificado previo conforme a las mismas reglas aplicables a las operaciones intraeuropeas, con las siguientes especialidades:

1º El certificado previo se podrá adaptar para dar cumplimiento a requisitos específicos que pudieran ser exigibles conforme al Derecho del Estado de destino, para asegurar su eficacia.

2º La transmisión entre autoridades o registros del certificado previo se regirá por la legislación general, ajustándose a las prácticas de cooperación registral internacional entre los Estados.

Artículo 133. Control de legalidad cuando España sea el Estado de destino

Cuando la sociedad resultante o beneficiaria de la operación sea o vaya a ser española, el Registrador Mercantil controlará la legalidad de la operación conforme a las reglas aplicables a las modificaciones estructurales intraeuropeas correspondientes con las siguientes especialidades:

1º El certificado previo se sustituirá por una certificación del registrador o autoridad competente extranjera que, por sí sola o en conjunción con otros documentos, acredite la legalidad de la operación.

2º Las notificaciones entre registros se regirán por la legislación general y se ajustarán a las prácticas de cooperación registral internacional entre Estados.

CAPÍTULO II

Disposiciones especiales

Sección Única. Transformación, fusión, escisión y cesión global

Artículo 134. Transformación

1. La transformación de una sociedad española en una sociedad constituida conforme al Derecho de un Estado que no forme parte del Espacio Económico Europeo solo podrá realizarse si el Derecho de ese Estado lo permite con mantenimiento de la personalidad jurídica.

2. La transformación de la sociedad extranjera en sociedad española no afectará a su personalidad jurídica si su ley personal permite el mantenimiento de dicha personalidad. La sociedad deberá cumplir con lo exigido por la ley española para la constitución del tipo societario de que se trate, justificando, en particular, con un informe de experto independiente que su patrimonio neto cubre la cifra de capital social exigido por el Derecho español.

Artículo 135. Fusión

Cuando una sociedad absorbente extranjera fuera titular directa, al menos, del 90% pero no de la totalidad del capital de la sociedad española absorbida, será necesario el informe de administradores de esta y de los expertos sobre el proyecto de fusión, así como su aprobación por la junta general.

Artículo 136. Escisión por segregación

Cuando la escisión se lleve a cabo como escisión por segregación, no se aplicará la simplificación de formalidades prevista para las segregaciones intraeuropeas.

Artículo 137. Cesión global de activo y pasivo

La cesión global de activo y pasivo se regirá por las mismas reglas aplicables a las cesiones globales de activo y pasivo intraeuropeas.

Disposición transitoria. Régimen transitorio.

La presente Ley se aplicará a las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles cuyos proyectos no hubieren sido aún aprobados por las sociedades implicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

Disposición derogatoria. Normas derogadas.

Queda derogada la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley. No obstante, mantendrán su vigencia las Disposiciones adicionales 1ª, 2ª y 3ª.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se modifican los siguientes artículos:

Artículo 160, letra g), que pasa a tener la siguiente redacción: “g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo”.

Artículo 194. 1, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. En las sociedades anónimas, para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto”.

Artículo 199, letra b), que pasa a tener la siguiente redacción: “b) La autorización a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social; la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital; la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo, y la exclusión de socios requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social”.

Artículo 346, apartado 3, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. En los casos de modificación estructural los socios tendrán el derecho de enajenación o separación en los términos establecidos en la Ley, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles”.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

Se modifican los siguientes artículos:

Artículo 399 ter 1, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. En el caso de que el convenio previera una modificación estructural los acreedores concursales no tendrán los derechos de tutela individual reconocidos en la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles”.

Artículo 317.3, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. En la propuesta de convenio podrá incluirse la modificación estructural de la persona jurídica concursada”.

Artículo 317 bis, que pasa a tener la siguiente redacción: “1. En la propuesta de convenio podrá incluirse la modificación estructural de la persona jurídica concursada. En ese caso la propuesta deberá ser firmada, además, por los respectivos representantes, con poder suficiente, de la entidad o entidades que sean parte en cualquiera de esas modificaciones estructurales. 2. En ningún caso la sociedad transformada, la sociedad absorbente, la nueva sociedad, las sociedades beneficiarias de la escisión o la sociedad cesionaria pueden llegar a tener un patrimonio neto negativo como consecuencia de la modificación estructural”.

Artículo 631.3, que pasa a tener la siguiente redacción: “3. Salvo por lo que respecta a la formación de la voluntad social de conformidad con lo previsto en este artículo, cualquier operación societaria que prevea el plan deberá ajustarse a la legislación societaria aplicable. En particular, en el caso de que el plan prevea una modificación estructural, los acreedores a los que afecte el plan no tendrán los derechos de tutela individual reconocidos en la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles”.

Disposición final tercera. Título competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.6.^a de la Constitución atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil.

Disposición final cuarta. Incorporación de Derecho comunitario.

Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE)2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.